

# LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN SU PROPIO PAÍS

Mémoire pour le  
Master II — Droit du Contentieux International  
par

**Laura ARENAS PERALTA**

DIRECTORA :  
**Marie Françoise VALETTE**

## **NOTA DE ADVERTENCIA**

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

## **AGRADECIMIENTOS**

En primer lugar quisiera agradecer a Marie Françoise Valette, quien aceptó ser mi directora, por su tiempo y sus consejos. También quisiera agradecer a mis padres y a todas las personas que de cerca o de lejos me apoyaron durante la elaboración de éste trabajo.

## TABLA DE CONTENIDO

<b>LISTA DES ABREVIACIONES.....</b>	<b>5</b>
<b>INTRODUCCIÓN GENERAL .....</b>	<b>7</b>
<b>PARTE I. LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS .....</b>	<b>13</b>
<b>CAPÍTULO I LA ELABORACIÓN DE NORMAS SIN FUERZA VINCULANTE .....</b>	<b>16</b>
SECCIÓN I Un Compromiso limitado de los Estados .....	17
SECCIÓN II. El Rol de las Instituciones.....	23
<b>CAPÍTULO II. EL CONTENIDO DE LOS PRINCIPIOS.....</b>	<b>32</b>
SECCIÓN I. Los principios rectores de los desplazamientos internos .....	32
SECCIÓN II Una laguna subsanada por los Principios Pinheiro .....	37
<b>PARTE II. INSTRUMENTOS VINCULANTES FRENTE AL DESPLAZAMIENTO .....</b>	<b>41</b>
<b>CAPITULO I. LAS INNOVACIONES NORMATIVAS DEL CONTINENTE AFRICANO .....</b>	<b>44</b>
SECCIÓN I. La Adopción de un instrumento vinculante .....	44
SECCIÓN II. El Contenido de las Normas de la Convención de Kampala .....	49
<b>CAPÍTULO II LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA .....</b>	<b>56</b>
SECCIÓN I. La ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado .....	56
SECCIÓN II : La ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras .....	59
<b>CONCLUSIÓN GENERAL .....</b>	<b>63</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>66</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>142</b>

## LISTA DES ABREVIACIONES

ACNUR.....	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AGNU.....	Asamblea General de Naciones Unidas
CEDH.....	Convención Europea de Derechos Humanos
CICR.....	Comité Internacional de la Cruz Roja
Convención IDH.....	Convención Interamericana de Derechos Humanos
Corte EDH.....	Corte Europea de Derechos Humanos
Corte IDH.....	Corte Interamericana de Derechos Humanos
FARC.....	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
IASC.....	Comité Permanente entre Organismos
NU.....	Naciones Unidas
OCHA.....	Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
OEA.....	Organización de Estados Americanos
OIM.....	Organización Internacional para las Migraciones
ONG.....	Organización no gubernamental
ONU.....	Organización de las Naciones Unidas
OSCE.....	Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
PIDCP.....	Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
PIDES.....	Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PKK.....	Partido de Trabajadores de Kurdistan
PNUD.....	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Principios Rectores.....	Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno
CIJ.....	Corte Internacional de Justicia
Principios Pinhiero.....	Principios sobre restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y desplazados
RUPD.....	Registro Único de Población Desplazada

SNARIV.....Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a  
Víctimas

UA.....Unión Africana

## INTRODUCCIÓN GENERAL

Mucho se ha escrito sobre la protección internacional de los refugiados que deben salir de su país de origen por un temor fundado de persecución con motivos de su raza, creencias, pertenencia a determinado grupo, entre otros. El derecho internacional de los refugiados nació después de la primera guerra mundial con la intervención de Fridtjof Nansen, quien era Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones para los refugiados y quien estuvo en cabeza de la creación de la Oficina Internacional Nansen para los Refugiados en los años treinta<sup>1</sup>. Sin embargo, no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial que se desarrolló un verdadero derecho internacional de los refugiados con la adopción de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Dicha Convención en principio sólo era aplicable a los sucesos ocurridos antes del primero de enero de 1951 en Europa o fuera de ella. Después con el Protocolo Adicional de 1967 se levantaron todos los límites espaciales y temporales de la Convención<sup>2</sup>.

Fue también con la resolución 319 (IV) del 3 de diciembre de 1949 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se creó el Alto Comisionado para los Refugiados como un órgano subsidiario de la Asamblea General a partir del primero de enero de 1951<sup>3</sup>. Éste órgano tiene por mandato la dirección y coordinación la acción internacional que busca la protección de los refugiados y la solución de los problemas que los mismos enfrentan en todo el mundo<sup>4</sup>. Fue a partir de los sucesos comentados que tanto la jurisprudencia como la doctrina se interesaron por el fenómeno de los refugiados y del derecho de asilo en todo el mundo.

Por el contrario, se ha escrito muy poco sobre la protección internacional de los desplazados que deben dejar sus hogares pero que no han atravesado una frontera internacional. Esto se debe a que éstas personas no son competencia, en principio, sino del país en el cual se encuentran. Después de la segunda guerra mundial, los conceptos de refugiados y desplazados no se distinguían plenamente en el seno de los instrumentos internacionales, por el contrario, ambos

---

<sup>1</sup>R. SALOMON. *Les réfugiés, « Que sais-je? »*. Presses Universitaires de France. 1963. P. 20

<sup>2</sup>J.M. BELORGEY. *Le droit d'asile*. LGDJ. Lextenso éditions 2013. P. 28-29

<sup>3</sup>*Ibid.* P.30

<sup>4</sup><http://www.unhcr.fr/pages/4aae621ebf.html>. Consulté le 18 avril 2015.

grupos de personas yacían bajo la competencia de la Organización Internacional para los Refugiados (OIR)<sup>5</sup>. No fue sino hasta 1962, que el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas empezó a utilizar el término “persona desplazada” haciendo referencia a “*las personas que encontrándose dentro de su país de origen son forzadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia por amenazas de violencia generalizada, de conflicto armado o de graves problemas de perturbación del orden público*”<sup>6</sup>.

En efecto, contrariamente a los refugiados, los desplazados no se encuentran cubiertos por una Convención Internacional<sup>7</sup>. De la misma forma, la protección que es acordada a los refugiados por el país de acogida es una protección que reemplaza aquella del país de origen<sup>8</sup>. Según E. Mooney, con el fenómeno del desplazamiento interno se deben tomar en consideración más factores que con el flujo de refugiados debido a que hay más posibles causas que pueden dar lugar a un desplazamiento forzado<sup>9</sup>. Cabe resaltar que contrariamente a los refugiados, las personas desplazadas internamente no tienen una cláusula específica por la cual su condición de desplazado deje de existir<sup>10</sup>. Realmente, el desplazamiento no cesa cuando las condiciones que dieron lugar a él dejan de existir sino cuando se alcanza una solución durable y las personas no requieren más atención o protección<sup>11</sup>.

Los principios rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas definen los desplazados internos como:

*“Las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a*

---

<sup>5</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l’Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 61-62

<sup>6</sup>Ibidem. p. 62.

<sup>7</sup>J. KELLENBERG. “The ICRC’s response to internal displacement: strengths, challenges and constraints”. *International Review of the Red Cross*. Volume 91. Number 875. Septembre 2009. P. 478. Traduit par nous.

<sup>8</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l’Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 67-68

<sup>9</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l’Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 67-68

<sup>10</sup>Informal consultative meeting. “The Protection of Internally displaced persons and the role of UNHCR”. Point 42. 27 février 2007. Traduit par nous. Disponible dans: <http://www.unhcr.org/protection/idps/50f951df9/protection-internally-displaced-persons-role-unhcr-excom-informal-consultative.html> Consulté le 10 août 2016.

<sup>11</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 660.



*escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”<sup>12</sup>.*

Los dos elementos fundamentales de la definición de desplazado interno son la partida involuntaria y el hecho que la persona se encuentre dentro de su país de origen. Sin embargo, ésta definición no concede un estatus legal especial como en el caso de los refugiados que tienen unos derechos especiales de protección internacional que encontramos en la Convención de 1951<sup>13</sup>.

Los desplazados internos se encuentran siempre bajo la jurisdicción de su país de origen y no pueden reclamar más derechos que el resto de la población<sup>14</sup>. Cabe resaltar que el hecho que la definición incluya la expresión “en particular” cuando habla de las causas del desplazamiento quiere decir que las causas incluidas dentro de la definición no son taxativas<sup>15</sup>.

Como lo señala Christel COURNIL:

*“La protección de los desplazados internos se encuentra diseminado en varios derechos: en el derecho nacional, en el derecho internacional público, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de los derechos humanos y en el “derecho de intervención en caso de catástrofe”. Este derecho se encuentra en construcción y progresa a medida que se desarrollan nuevas prácticas y se formaliza en el soft law<sup>16</sup> que repercute luego en las legislaciones nacionales”<sup>17</sup>.*

---

<sup>12</sup>Parágrafo 2, Introducción Principios Rectores sobre desplazamiento interno. 1998.

<http://www.unhcr.org/fr/protection/idps/4b163f436/principes-directeurs-relatifs-deplacement-personnes-linterieur-propre-pays.html> Consulté le 12 juin 2016.

<sup>13</sup>M. Silska. “Protection of internally displaced persons: An international legal obligation?” *Polish yearbook of international law*. 2015. P.252. Traduit par nous.

<sup>14</sup>Ibidem.

<sup>15</sup>Ibidem.

<sup>16</sup> El soft law son los mecanismos, tales como declaraciones, resoluciones y programas de acción, que demuestran conformidad ante las normas de derecho internacional, pero no son vinculantes ante la ley. En: <https://pangeaupr.org/2016/03/18/apuntes-de-derecho-internacional-que-son-el-soft-law-y-el-hard-law/>

<sup>17</sup>C. CURNIL. « L’émergence d’un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. P. 24

El derecho internacional humanitario se ha interesado por los desplazados. Éste derecho es una rama del derecho internacional público que trata las cuestiones relativas a los conflictos armados, consiste en reglas convencionales y consuetudinarias<sup>18</sup>. Las personas desplazadas al interior de su propio país han sido frecuentemente tratadas como civiles bajo las Convenciones de Ginebra de 1969 y sus protocolos adicionales. Estos instrumentos buscan que se garantice a los desplazados el derecho a permanecer en su residencia habitual, sin embargo, dicho derecho tiene sus límites como son: debe tratarse de guerras definidas en las Convenciones de 1949, conflictos armados internacionales según el Protocolo I o conflictos armados no internacionales como los previstos en el Protocolo II<sup>19</sup>.

Justamente, la cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de los civiles en tiempos de guerra establece que las personas deben cumplir dos condiciones para que la protección les sea acordada: se deben encontrar en manos de una de las partes del conflicto o de una potencia ocupante y no debe existir ningún lazo de nacionalidad entre la persona y la potencia en manos de la que se encuentra (art 4, al. 1)<sup>20</sup>. Por su parte, el Protocolo adicional II de 1977, aplicable a los conflictos armados no internacionales establece que “no se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto (art 17, Protocolo II) »<sup>21</sup>.

El desplazamiento sólo podrá tener lugar cuando así lo exijan la seguridad de las personas privadas o razones militares imperiosas<sup>22</sup>. Este desplazamiento debe obedecer entonces a cuatro condiciones acumulativas: debe ser imperioso, por razones legítimas, debe ser excepcional y temporal<sup>23</sup>. Lo anterior también fue reafirmado en la regla 129 (B) del estudio de derecho

---

<sup>18</sup>S. OJEDA. “International humanitarian law and the protection of internally displaced persons”.Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.635. Traduit par nous.

<sup>19</sup>O. CASANOVAS. « La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés ». Recueil de Cours de l’Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 49

<sup>20</sup>Ibidem.

<sup>21</sup>Ibidem. p. 54

<sup>22</sup>Ibidem.

<sup>23</sup>S. OJEDA. “International humanitarian law and the protection of internally displaced persons”.Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.640. Traduit par nous.

internacional humanitario de la CICR que prohíbe el desplazamiento forzado en los conflictos armados no internacionales<sup>24</sup>.

Del mismo modo, el derecho internacional de los derechos humanos se ha interesado por las personas desplazadas pero éste derecho no dice formula expresamente un derecho a no ser desplazado arbitrariamente<sup>25</sup>. Sin embargo, dicho derecho se encuentra implícito si tomamos en cuenta otros derechos como son el derecho de libre circulación y residencia así como el derecho a la vida<sup>26</sup>. El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos afirma en su artículo 12 que “*toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia*”<sup>27</sup>. También encontramos el derecho de libre circulación y de escoger libremente la residencia en el territorio de un Estado en el artículo 13, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así como en el artículo 2, numeral 1 del Protocolo número 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos<sup>28</sup>.

De la misma manera, la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1994/68 de 1994 evoca las normas del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de refugiados aplicables a las personas que han sido desplazadas internamente<sup>29</sup>. El Estatuto de Roma en su artículo 8(2)(e)(viii) que habla sobre crímenes de guerra, hace igualmente referencia a la prohibición del desplazamiento de la población civil en los conflictos armados no internacionales<sup>30</sup>. Las personas desplazadas también

---

<sup>24</sup>S. OJEDA. “International humanitarian law and the protection of internally displaced persons”. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.640. Traduit par nous.

<sup>25</sup>Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays. M. Chaloka Beyani. 4 avril 2014. A/HRC/26/33. Point 34.

<sup>26</sup>O. CASANOVAS. « La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés ». Recueil de Cours de l’Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 59

<sup>27</sup>C. CURNIL. « L’émergence d’un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p. 5-6

<sup>28</sup>O. CASANOVAS. « La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés ». Recueil de Cours de l’Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 78 S. OJEDA. “International humanitarian law and the protection of internally displaced persons”. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.638. Traduit par nous.

<sup>29</sup>A. CANÇADO TRINDADE. « Le Déracinement et la Protection des migrants dans le droit international des droits de l’homme. » *Revue trimestrielle des droits de l’homme*. N°74. 2006. p. 299

<sup>30</sup>J. WILLMS. « Without order anything goes ? The prohibition of forced displacement in non-international armed conflict. » *International Review of the Red Cross*. Vol 91, number 875. Septembre 2009. p. 561. Traduit par nous.

están protegidas contra la tortura, los tratamientos inhumanos y degradantes, los ultrajes contra la dignidad de la persona, los actos de terrorismo, la esclavitud, el secuestro, el saqueo, entre otros.

No obstante, fue solamente con la creación de los principios rectores de los desplazamientos internos que se hizo un verdadero esfuerzo para proteger a éstas personas a nivel internacional, ya que se precisaron unas normas mínimas de protección y asistencia<sup>31</sup>. De esta forma, un cuadro general de protección fue creado por medio de principios rectores (Parte I). Empero, más recientemente se han hecho instrumentos más fuertes y vinculantes a nivel tanto regional como nacional para dar un nuevo enfoque a éste fenómeno (Parte II).

---

<sup>31</sup> Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre pays. M. Chaloka Beyani. 4 avril 2014. A/HRC/26/33. Point 32.

## **PARTE I.**

### **LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS**

En 1992, dos importantes eventos tuvieron lugar : en primer lugar el Secretario General de Naciones Unidas presentó un estudio analítico sobre las personas desplazadas, que le había sido solicitado por la Comisión de Derechos Humanos, por medio de una resolución que había sido aprobada por *consensus*<sup>32</sup>. En segundo lugar, un Relator Especial sobre los desplazados internos fue designado<sup>33</sup>. Éste órgano nació como consecuencia de la solicitud que hizo la Comisión de Derechos Humanos al Secretario General en su resolución 1992/73 del 5 de marzo de 1992, que fue aprobada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas<sup>34</sup>.

En dicha resolución, la Comisión de Derechos Humanos reafirmó que el concepto de persona desplazada internamente concernía a los derechos humanos<sup>35</sup>. Fue la primera vez que una organización internacional creó un puesto dedicado exclusivamente al desplazamiento interno<sup>36</sup>. Al principio, su misión consistía en compilar y analizar las normas jurídicas aplicables a los desplazados internos<sup>37</sup>. Francis Deng<sup>38</sup> fue nombrado como el primer relator.

En un principio, los diferentes Estados eran reticentes a hablar sobre la protección de las personas desplazadas o la necesidad de crear una protección específica. Deng decidió

---

<sup>32</sup>P. ORCHARD. “Protection of internally displaced persons: soft law as a norm-generating mechanism”. *Review of International Studies*. Vol. 36. N°2. Avril 2010. p. 290. Traduit par nous.

<sup>33</sup>W. KALIN. “*The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*”. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.613. Traduit par nous.

<sup>34</sup>Commission des droits de l’homme. Rapport sur la quarante-huitième session. 27 janvier-6 mars 1992. Conseil Économique et Social. Documents officiels, 1992. Supplément N°2. E/1992/22. E/CN. 4/1992/84. Point 19. p.12

<sup>35</sup>M. Silska. “Protection of internally displaced persons: An international legal obligation?” *Polish yearbook of international law*. 2015. P.257. Traduit par nous.

<sup>36</sup>W. KALIN. *The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.613. Traduit par nous.

<sup>37</sup> O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l’Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005.p. 45

<sup>38</sup>Francis Deng es considerado el padre intelectual del concepto de “responsabilidad de proteger” al haber sido el primero en tratar la soberanía como responsabilidad desde los años 90s. Fue nombrado como Consejero especial el Secretario General de la ONU para la prevención del genocidio en 2007. (S. SZUREK. « La responsabilité de protéger : Du principe à son application. Quelques remarques sur les enjeux du *Law Making Process* en cours. ». Disponible dans : [http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/60- Article\\_Szurek.pdf](http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/60- Article_Szurek.pdf). Consulté le 12 septembre 2016. p. 7). Para más información sobre la responsabilidad de proteger: [www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/responsibility](http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/responsibility)

entonces hacer una “Recopilación y análisis” de reglas y normas en la que analizó los fundamentos legales de la protección de las personas que se encontraban en esta situación. Ésta recopilación fue presentada a la Comisión de Derechos Humanos en dos volúmenes en 1996 y 1998<sup>39</sup>. En el documento en cuestión, se hace un enfoque basado en las necesidades de las personas y Dengo concluyó que si bien el derecho internacional era aplicable a éstas situaciones, todavía había muchos aspectos inciertos debido a las grandes lagunas normativas<sup>40</sup>.

El estudio identificó específicamente diecisiete áreas en las que la protección era insuficiente y ocho lagunas normativas<sup>41</sup>. La Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1996/52 del 19 de abril de 1999, que fue adoptada por *consensus*, exhortó al relator especial sobre los desplazados internos a hacer un marco normativo para la protección de los desplazados internos<sup>42</sup><sup>43</sup>. Sin embargo, no le fue dada ninguna especificación sobre la naturaleza que debía revestir el texto<sup>44</sup>. Dengo optó finalmente por elaborar unos principios rectores y la idea de los Principios rectores de los desplazamientos internos fue lanzada en 1998<sup>45</sup>. Dicho texto fue elaborado entonces bajo normas sin fuerza vinculante (Capítulo I), pero en su contenido encontramos implícitamente referencia a otras normas internacionales que si son vinculantes (Capítulo II).

---

<sup>39</sup>W. KALIN. “*The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*”. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.615. Traduit par nous.

<sup>40</sup>R.K. GOLDMAN. “Internal displacement, the Guiding Principles on Internal Displacement, the Principles Normative Status, and the Need for their effective implementation in Colombia”. *Anuario Colombiano de Derecho internacional*. Volume 2. 2009. p. 64. Traduit par nous.

<sup>41</sup>Ibidem.

<sup>42</sup>W. KALIN. “*The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*”. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p. 616

<sup>43</sup>E/CN.4/RES/1996/52

<sup>44</sup>W. KÄLIN. « How hard is soft law ?The Guiding Principles on Internal Displacement and the need for a Normative Framework ». Presentation at Roundtable meeting. Ralph Bunche Institute for International Studies. CUNY graduate center. December 19, 2001. p. 1. Disponible dans « <http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/articles/Kaelin12-19-01.pdf> » Traduit par nous.

<sup>45</sup>Ibidem.

# CAPÍTULO I

## LA ELABORACIÓN DE NORMAS SIN FUERZA VINCULANTE

El texto de los Principios Rectores fue entonces ideado por un equipo de expertos consultando solamente las organizaciones y agencias interesadas<sup>46</sup>. Los treinta principios rectores fueron finalmente presentados en enero de 1998, en una consulta de expertos que tuvo lugar en Austria, y que reunió representantes de diferentes agencias de Naciones Unidas, la organización de la Unión Africana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), organizaciones humanitarias no gubernamentales y expertos académicos de las Américas y Europa<sup>47</sup>. El resultado de éstos esfuerzos fue presentado en marzo de 1998 en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos que tuvo lugar en Ginebra<sup>48</sup>.

Deng optó por hacer unos principios rectores en lugar de un tratado internacional debido a que los tratados deben ser ratificados por los diferentes Estados y se pueden hacer reservas a los mismos, tratándose de disposiciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario la posibilidad de hacer reservas podía perjudicar las disposiciones existentes y además debían evitarse negociaciones muy largas<sup>49</sup>. Los Estados en la elaboración de los Principios Rectores decidieron entonces adquirir un compromiso limitado (Sección I) frente a los desplazados internos, y fueron entonces las instituciones internacionales quienes debieron jugar un rol complementario mayor para protegerlos (Sección II).

---

<sup>46</sup>C. COURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p. 7

<sup>47</sup>W. KALIN. *The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.616. Traduit par nous.

<sup>48</sup>Ibidem.

<sup>49</sup>W. KÄLIN. « How hard is soft law ? The Guiding Principles on Internal Displacement and the need for a Normative Framework ». p. 2-3



## SECCIÓN I

### Un Compromiso limitado de los Estados

Podemos decir que la naturaleza de los Principios rectores es aún más débil que el *soft law* (Parágrafo I) ya que no fueron adoptados por los Estados, como es el caso de las recomendaciones, sino que fueron adoptados por expertos. Sin embargo, en casi todas las disposiciones podemos notar que se hace referencia a provisiones que ya existen en otros textos internacionales y que pueden ser invocados<sup>50</sup>. La Comisión de Derechos Humanos adoptó entonces por *consensus* una resolución por medio de la cual el Relator Especial sobre desplazados internos, se compromete a utilizar los principios en el dialogo con los diferentes gobiernos e instituciones cuyo mandato consiste en la protección de las personas desplazadas<sup>51</sup>. La pregunta clave es entonces si la utilización de los Principios por las diferentes instituciones internacionales ha hecho de ellos un instrumento más fuerte, que podría ser considerado como parte de la costumbre internacional (Parágrafo II).

#### § 1. La naturaleza “suave” de los Principios

Después de la adopción de los Principios rectores, un pequeño grupo de Estados con Egipto a la cabeza, comenzaron a criticar el hecho que los mismos no habían sido adoptados llevando a cabo negociaciones en el Consejo Económico y Social y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero éstos Estados fueron poco a poco abandonando esa posición<sup>52</sup>.

En un principio, los Estados eran reticentes a la idea de la creación de un texto internacional para la protección de las personas desplazadas dentro de su país, temiendo que, bajo el concepto de protección se escondiera en realidad una amenaza a los

---

<sup>50</sup>W. KÄLIN. « How hard is soft law?The Guiding Principles on Internal Displacement and the need for a Normative Framework » .p.6

<sup>51</sup>F.Deng. « Note liminaire du Représentant du Secrétaire Général pour les personnes déplacées ». *Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays*.Doc. ONU E/CN.4/1998/53/add. 2. 11 février 1998.

<sup>52</sup>W. KALIN. *The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p. 621

principios de soberanía y no injerencia<sup>53</sup>. Esto se debía al hecho que en las situaciones de desplazamiento forzado en un país, la legislación nacional debe ser la fuente principal para determinar el derecho aplicable a la situación, y se deben incluir disposiciones garantizando la asistencia y protección de éstas personas (Principio 3)<sup>54</sup>. La legislación nacional debe encontrarse conforme con los estándares mínimos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos<sup>55</sup>. No obstante, dicha legislación presenta muchas veces lagunas y una protección internacional para las personas en ésta situación se hace necesaria. La protección internacional de las personas desplazadas en su país en entonces una protección complementaria<sup>56</sup>. Los Principios rectores se aplican tanto a los gobiernos como a todos los grupos, individuos y autoridades que se ven afectados en sus relaciones por el desplazamiento forzado, creando así una protección mixta en todo momento del desplazamiento<sup>57</sup>.

En consecuencia, los Principios rectores no son un instrumento jurídicamente vinculante para los Estados<sup>58</sup>. Ellos constituyen *soft law* internacional, esto quiere decir que están desprovistos de fuerza obligatoria y no dan lugar a obligaciones internacionales o a sanciones, sin embargo, si pueden acarrear efectos legales<sup>59</sup>. En efecto, el *soft law* tiene ciertas ventajas: en primer lugar tiene un mayor alcance que el *hard law*<sup>60</sup> ya que puede tratar sobre temas que, en general, los Estados son más reticentes a tratar por razones de

---

<sup>53</sup>W. KÄLIN. « How hard is soft law?The Guiding Principles on Internal Displacement and the need for a Normative Framework ». p. 6

<sup>54</sup>J. KELLENBERG. “The ICRC’s response to internal displacement: strengths, challenges and constraints”*International Review of the Red Cross*. Volume 91. Number 875. Septembre 2009. p. 478. Traduit par nous.

<sup>55</sup>« Movement Policy on Internal Displacement. Document prepared by the International Comitee of the Red Cross and Red Crescent Societies for the Council of Delegates of the international Red Cross and Red Crescent Movements. Nairobi, Kenya, 23-25 november 2009. »*International Review of the Red Cross*. Volume 91. Number 875. Septembre 2009. p. 610. Traduit par nous.

<sup>56</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l’Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 67

<sup>57</sup>A. CANÇADO TRINDADE. « Le Déracinement et la Protection des migrants dans le droit international des droits de l’homme. » *Revue trimestrielle des droits de l’homme*. N°74. 2006. p. 298

<sup>58</sup>C. COURNIL. « L’émergence d’un droit pour les personnes déplacées internes ».*Revue québécoise de droit international*.2009. p. 6

<sup>59</sup>W. KALIN. “The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons”. *Research handbook on International Law and Migration*. 2014. p.627.Traduit par nous.

<sup>60</sup> Este concepto se refiere en esencia a los tratados y reglas adoptados por los Estados. Son instrumentos vinculantes.

soberanía o porque las negociaciones pueden ser demasiado largas. En segundo lugar, puede contribuir al desarrollo de nuevas normas internacionales por medio de un conjunto de estándares que pueden ser adoptados por los Estados en sus legislaciones nacionales<sup>61</sup>. Los Estados pueden entonces crear estructuras jurídicas dedicadas al desplazamiento interno o incorporar los principios rectores en su legislación nacional<sup>62</sup>.

Ciertos Estados como en el caso de Burundi, Angola y Colombia han reconocido la autoridad de los Principios<sup>63</sup>. Si miramos la manera como los diferentes Estados han incorporado los principios rectores en sus legislaciones nacionales, podemos ver que lo hacen de 3 maneras: Pueden hacer una simple referencia a ellos en sus legislaciones nacionales, como es el caso de Burundi que hizo un acuerdo con las UN en 2001; también pueden elaborar políticas públicas o estrategias con dichos principios, como ejemplo tenemos a Uganda y Georgia; finalmente, pueden hacer reglas que incorporen completamente o parcialmente el contenido de los principios, como es el caso del Perú<sup>64</sup>.

## ***§ 2. Una fuerza adquirida poco a poco***

El alcance de los Principios rectores fue afirmado en la cumbre mundial de 2005 que reconoció que eran “un marco normativo importante para la protección de los desplazados internos”<sup>65</sup>. Del mismo modo la OSCE reconoció que los principios rectores constituían un elemento útil de trabajo. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una resolución en 2008 en la que se hace referencia

---

<sup>61</sup>P. ORCHARD. « Protection of internally displaced persons : soft- law as a norm-generating mechanism ». *Review of International Studies*. Vol 36. N°2. Avril 2010. p. 286-287. Traduit par nous.

<sup>62</sup>C. CURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p. 9

<sup>63</sup>W. KÄLIN. « How hard is soft law ?The Guiding Principles on Internal Displacement and the need for a Normative Framework ». Presentation at Roundtable meeting. Ralph Bunche Institute for International Studies. CUNY graduate center. December 19, 2001. p. 7. Disponible dans « <http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/articles/Kaelin12-19-01.pdf> » Consulté le 24 juin 2016. Traduit par nous.

<sup>64</sup>W. KALIN. “The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons”. *Research handbook on International Law and Migration*. 2014. p.623-624. Traduit par nous.

<sup>65</sup>C. CURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p. 7.

a los principios. La Conferencia Internacional para la región de los Grandes Lagos adoptó en 2006 el Protocolo de los Grandes Lagos sobre las personas desplazadas, dicho instrumento fue adoptado por diez Estados del este de África para la incorporación de los principios en sus legislaciones nacionales<sup>66</sup>. Después, la Unión Africana tuvo en cuenta los Principios para la elaboración de la Convención de Kampala en 2009<sup>67</sup>. El comité de ministros del Consejo de Europa adoptó también una recomendación en 2006 (Recomendación 6) sobre las reglas y principios que deben regir la práctica de los Estados frente a los desplazados internos<sup>68</sup>. En el párrafo 13 de dicha recomendación se establece que “*con el objetivo de cubrir las lagunas existentes en derecho internacional, en relación con el tratamiento de los desplazados internos, los Estados deberán preocuparse por la elaboración de instrumentos internacionales suplementarios*”<sup>69</sup>.

En 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas notó que un número creciente de Estados, de organizaciones de UN y de organizaciones regionales y no gubernamentales estaban aplicando los Principios como estándares<sup>70</sup>. Encontramos también que entre 2000 y 2010, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la eliminación de la discriminación racial, el Comité para los Derechos de la Infancia y el Comité sobre los Derechos económicos, sociales y culturales, recomendaron a 13 países, que reforzaran los Derechos Humanos de los desplazados internos por conflictos armados y catástrofes naturales<sup>71</sup>.

Si quisiéramos hacer una comparación entre los Principios rectores de los desplazamientos internos y otros principios que se convirtieron luego en reglas de derecho, podríamos

---

<sup>66</sup>W. KALIN. “The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons”. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.624-625. Traduit par nous.

<sup>67</sup>C. CURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p. 10

<sup>68</sup>W. KALIN. “The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons”. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p. 624. Traduit par nous.

<sup>69</sup>. CURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p.9

<sup>70</sup>. CURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p.9

<sup>71</sup>Ibidem. p. 625

tomar como ejemplo la Declaración sobre las Desapariciones Forzadas que condujo a la posterior adopción por el Consejo Económico y Social de UN de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, en 2006<sup>72</sup>. En efecto, en 1980 un grupo de trabajo fue formado para tratar sobre ésta cuestión y en 1992 la Declaración para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas<sup>73</sup>. El grupo de trabajo continuó trabajando sobre éste tema y en el 2002 fue designado un nuevo grupo de trabajo con el objetivo de presentar un proyecto de Convención<sup>74</sup>. El proyecto fue presentado en 2005 a la Comisión de Derechos Humanos de UN y la Convención fue aprobada por unanimidad en junio del 2006 para ser adoptada, finalmente, en diciembre de ese mismo año.

Según el artículo 38 del Estatuto de la CIJ, la costumbre internacional es la “prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”. Ella ocupa un lugar central entre los diferentes elementos de formación del derecho internacional. Tradicionalmente dos tesis se han enfrentado frente a esta fuente de derecho: para la primera, la costumbre internacional posee un fundamento exterior y superior a la voluntad de los Estados, es decir, que se forma independientemente de su consentimiento<sup>75</sup>. La segunda tesis, o la teoría voluntarista, sostiene, por el contrario, que ésta reposa como los tratados en la voluntad de los Estados, es decir, que no puede existir sin el consentimiento de los mismos<sup>76</sup>. Además, ciertos países en vía de desarrollo han sostenido la idea que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fueron adoptadas por *consensus* o por una gran mayoría representativa, deben ser consideradas como costumbre internacional<sup>77</sup>.

---

<sup>72</sup>E.DECAUX. «Déclarations et Convention en droit international.» *Cahiers du Conseil constitutionnel N°21*. janvier 2007. <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-21/declarations-et-conventions-en-droit-international.50561.html> (accès le septembre 15, 2016).

<sup>73</sup>«Conventiion internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée.» *Plataforme d'information humanrights.ch*. 21 mai 2014. <http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-traites/disparitions/> (accès le septembre 16, 2016).

<sup>74</sup> Ibidem.

<sup>75</sup>J. COMBACAU et S. SUR. *Droit international public*. Montchreisten, Lextenso éditions. 2008. p. 54-55

<sup>76</sup>Ibidem. p. 55

<sup>77</sup>Ibidem. p. 61

Para Cristel CURNIL, éstos principios son derecho internacional consuetudinario, ya que reflejan una práctica estatal extendida, representativa, uniforme y aceptada y el hecho que dichos Principios hayan sido invocados por una jurisdicción europea, como fue el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso *Dogan y otros contra Turquía* de 2004, es un indicio de su valor consuetudinario<sup>78</sup>.

El caso mencionado trataba sobre los habitantes de Boydas, un pueblo al sur este de Turquía, en el que había un conflicto que enfrentaba a las fuerzas de seguridad y a ciertas fracciones de la población kurda que apoyaban la autonomía kurda. Entre éstos últimos se encontraban los miembros del Partido de Trabajadores de Kurdistan (PKK). El conflicto llevó a los habitantes de ésta región a desplazarse abandonando sus hogares o lugares de trabajo<sup>79</sup>. Los demandantes buscaban volver y se quejaban de la negativa de las autoridades para dejarlos regresar a sus hogares<sup>80</sup>. La Corte Europea de Derechos Humanos hizo mención de los Principios rectores para concluir que los esfuerzos hechos por el gobierno turco para mejorar la situación general de las personas desplazadas no habían sido ni efectivos ni adecuados<sup>81</sup>.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *ChitayNech y otros contra Guatemala* también hizo referencia a los Principios rectores del desplazamiento y los relacionó con el artículo 22 de la Convención IDH<sup>82</sup>. La Corte Interamericana tuvo el mismo razonamiento en el caso *ComunidadMoiwana c. Suriname* del 15 de junio de 2005<sup>83</sup> y en el caso *Masacres de Ituango c. Colombie* del 1 de julio de 2006<sup>84</sup>.

---

<sup>78</sup>C. CURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009.p. 11

<sup>79</sup>C. CURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009.p. 11

<sup>80</sup>Ibidem. Point 89.

<sup>81</sup>Ibidem. Point 154.

<sup>82</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chitay Nech y otros c. Guatemala. 25 de mayo 2010. Point 140.

<sup>83</sup>Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Moiwana c. Suriname. 15 de junio 2005. Point 111.

<sup>84</sup>Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacres de Ituango c. Colombia. 1 de junio 2006. Point 208.

El gobierno alemán también ha considerado que los Principio rectores pueden ser considerados, hoy en día, costumbre internacional<sup>85</sup>. Por el contrario, Walter KALIN considera que el uso de los Principios por las organizaciones internacionales, por los Estados o por las jurisdicciones nacionales e internacionales, es todavía muy limitado para poder ser considerado una práctica “general”<sup>86</sup>. De hecho, en la cumbre de 2005, la propuesta del Secretario General de NU de considerar los Principios como “la norma base para la protección de los desplazados internos” fue rechazada y se les reconoció solamente como un marco normativo importante para la protección de éstas personas<sup>87</sup>.

## **SECCIÓN II.**

### **El Rol de las Instituciones**

El artículo 25 de los Principios rectores del desplazamiento interno, recuerda que la responsabilidad de las personas desplazadas atañe, en primer lugar, a las autoridades nacionales. Sin embargo, el mismo artículo en su numeral segundo nos dice que “*las organizaciones humanitarias internacionales y otros partícipes competentes tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos*”<sup>88</sup>.

Las personas desplazadas internamente tienen derecho a asistencia y protección. La protección consiste en el apoyo que se da a las personas en la defensa jurídica de sus derechos, en el dialogo con las autoridades y en la coordinación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Por su parte, la asistencia consiste en el suministro de ayudas materiales de alimentos, vestidos, de vivienda y acceso a los servicios de salud, entre otros<sup>89</sup>. La acción humanitaria se debe regir por los principios

---

<sup>85</sup>S. OJEDA. “International humanitarian law and the protection of internally displaced persons”.Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.645.Traduit par nous.

<sup>86</sup>S. OJEDA. “International humanitarian law and the protection of internally displaced persons”.Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.645.Traduit par nous.

<sup>87</sup>Ibidem.

<sup>88</sup>Ibidem.

<sup>89</sup>Ibidem.

de no causar daños, humanidad e imperativo humanitario, imparcialidad, independencia y neutralidad<sup>90</sup>.

Lo anterior se encuentra conforme a las Convenciones de Ginebra que establecen en el artículo 3 común, que un organismo imparcial podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto, y conforme al artículo 70 del primer Protocolo adicional de 1997 que nos dice que las partes del conflicto deben autorizar y favorecer “el paso rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y personal de socorro...”<sup>91</sup>. La asistencia será conferida a las personas desplazadas solamente si el Estado autoriza la intervención de las organizaciones internacionales, pero éste no la puede denegar por razones arbitrarias<sup>92</sup>. Sin embargo, los Principios carecen de una real efectividad en el terreno porque no hay ninguna agencia u organización internacional, que sea responsable exclusivamente de las personas desplazadas internamente<sup>93</sup>.

En 2004, el mandato del Relator especial sobre los desplazamientos forzados llegó a su fin y la Comisión solicitó al Secretario General la creación de un nuevo cargo dedicado a ésta cuestión. Fue así que en septiembre de 2004, el Secretario General designó un Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los desplazados internos y Walter Kälin fue designado para éste cargo<sup>94</sup>. Hoy en día, las principales funciones del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los desplazados internos son llevar a cabo un dialogo sobre los derechos y la ayuda internacional de los desplazados internos y sobre los trámites para su reconocimiento por los gobiernos<sup>95</sup>.

---

<sup>90</sup>Groupe de travail sectoriel global sur la protection. « Manuel pour la protection des déplacés internes ». Mars 2010. p.16

<sup>91</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 662. Traduit par nous.

<sup>92</sup>W. KALIN. *The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.619. Traduit par nous.

<sup>93</sup>W. KALIN. *The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.619. Traduit par nous.

<sup>94</sup>Ibidem.

<sup>95</sup>C. COURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p. 5



Se llevaron a cabo discusiones sobre la necesidad de crear una agencia especializada en la protección de los desplazados internos, pero esto no se concretó porque no existía ni la voluntad de los Estados ni los recursos suficientes para crear una<sup>96</sup>. Además, los diferentes gobiernos tenían miedo de una injerencia en sus asuntos internos y se consideró que una agencia especializada duplicaría el trabajo de las agencias que ya se encontraban involucradas con la ayuda de éstas personas<sup>97</sup>. Hubo incluso una propuesta de la Universidad de Georgetown para la creación de un Alto Comisariado para las migraciones forzadas que estaría a cargo tanto de los refugiados como de las personas desplazadas internamente, pero dicha propuesta tampoco fue aceptada<sup>98</sup>.

En la práctica, frente a la incapacidad de los Estados de manejar los flujos de personas desplazadas, las organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el ACNUR ofrecen ayuda de urgencia y garantizan su protección en situaciones difíciles<sup>99</sup>. Fue así que en 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas con la resolución 2958 (XXVII) del 12 de diciembre de 1972, sobre las operaciones humanitarias especiales en Sudán y debido a la solicitud del Secretario General, amplió la noción de personas que se encontraban bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR), incluyendo a las personas desplazadas internamente<sup>100</sup>.

Ésta solicitud de ampliar la noción fue iniciada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en el contexto de la repatriación voluntaria en Sudán del sur<sup>101</sup>. Otras resoluciones como la Resolución 48/116 de la Asamblea General del 20 de diciembre de

---

<sup>96</sup>R. COHEN. « Protection of internally displaced persons :National and International responsibilities ». *Reasearch handbook on International law and migration*.2014. p.602

<sup>97</sup>R. COHEN. « Protection of internally displaced persons :National and International responsibilities ». *Reasearch handbook on International law and migration*.2014. p.602

<sup>98</sup>Ibidem.

<sup>99</sup>C. COURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*.2009. p. 3

<sup>100</sup>C. COURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*.2009. p. 3

<sup>101</sup>UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Aspects de protection des activités du HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du territoire*, 17 Août1994, EC/SCP/87, Disponible dans: <http://www.refworld.org/docid/3ae68ccb8.html> [Consulté le 10 Août 2016]

1993<sup>102</sup> o la Resolución 49/169 del 20 de diciembre de 1994<sup>103</sup>, reafirmaron el rol del ACNUR frente a los desplazados internos. La Resolución 53/125 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1998 reafirmó el rol del ACNUR frente a los desplazados internos manifestando que “toma nota de los Principios rectores de los Desplazamientos Internos y reafirma su apoyo a la función de la Oficina del Alto Comisionado de proporcionar asistencia humanitaria y protección a los desplazados internos, sobre la base de solicitudes concretas del Secretario General o de los órganos competentes de Naciones Unidas y con el consentimiento del Estado interesado (...)”<sup>104</sup>.

El rol de las diferentes organizaciones internacionales estuvo, en un primer tiempo, coordinado por un Comité Permanente entre organismos (Parágrafo I), sin embargo, después de la cumbre del 2005, se consideró que era mejor poner en marcha una responsabilidad sectorial (Parágrafo II).

### ***§ 1. El enfoque del Comité Permanente entre Organismos***

En 1992, al mismo tiempo que el Secretario General designó un Relator Especial sobre los desplazados internos, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la creación, por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, de un grupo de trabajo sobre las personas desplazadas bajo el marco de un comité entre agencias permanente<sup>105</sup>. Después de la adopción de los Principios rectores sobre los desplazamientos internos en 1998, la Comisión de Derechos Humanos adoptó por consenso una resolución en la que el

---

<sup>102</sup>Por medio de esta resolución, la AGNU apoya las labores del ACNUR tendientes a aportar ayuda a los desplazados internos en situaciones concretas. O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 42

<sup>103</sup>En esta resolución la AGNU dice que se debe brindar asistencia a todos los que lo necesitan en situaciones de conflicto o persecución. Ibidem. p. 41

<sup>104</sup>Assemblée Générale des Nations Unies. Résolution 53/125 du 12 février 1999. Paragraphe 16.

<sup>105</sup>UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Aspects de protection des activités du HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du territoire*, 17 Août 1994, EC/SCP/87, Disponible dans: <http://www.refworld.org/docid/3ae68ccb8.html> [Consulté le 10 Août 2016]. Point 5.

Comité Permanente entre Organismos se comprometió a alentar a sus miembros para que dieran a conocer los Principios a sus comités ejecutivos<sup>106</sup>.

La idea de fondo de las Naciones Unidas era de generar una respuesta concertada frente a las crisis causadas por los desplazamientos internos, lo anterior implica que en lugar de comprometer la responsabilidad de una sola agencia, un gran número de actores, partes o no del sistema de NU, gubernamentales o no gubernamentales, son llamados a trabajar juntos para responder a las necesidades de las personas desplazadas<sup>107</sup>. Ésta posición fue evocada por primera vez por el Comité Permanente entre Organismos en diciembre de 1999<sup>108</sup>.

El Comité Permanente entre organismos (IASC) está a cargo de elaborar las políticas y herramientas humanitarias, de velar por el respeto de los principios humanitarios y de trabajar por llenar todas las lagunas existentes que pueden existir en la respuesta global<sup>109</sup>. El Comité es presidido por el Coordinador del socorro en emergencias<sup>110</sup>.

## **§ 2. La puesta en práctica de la responsabilidad sectorial**

En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas le pidió al Comité Permanente entre Organismos, que elaborara una respuesta más previsible y efectiva frente a los problemas de los desplazados internos, en los sectores donde se evidenciaron lagunas en la respuesta humanitaria<sup>111</sup>. El Comité creó entonces la noción de “*cluster approach*” o

---

<sup>106</sup>R.K. Goldman. « Codification des règles internationales relatives aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays ». *Revue Internationale de la Croix Rouge*. N°831. 30 septembre 1998. Disponible dans : <https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfdh.htm>. Consulté le 8 août 2016.

<sup>107</sup>Comité permanent interorganisations. « Mise en œuvre de l'action concertée face aux situations de déplacement interne. Directive pour les coordinateurs humanitaires et/ou résidents et les équipes de pays des Nations Unies ». Septembre 2004. p. 4. Disponible dans : [https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy\\_files/IDP%20Policy%20Package%20-%20French.pdf](https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IDP%20Policy%20Package%20-%20French.pdf) Consulté le 10 août 2016.

<sup>108</sup>Ibidem.

<sup>109</sup>Groupe de travail sectoriel global sur la protection. « Manuel pour la protection des déplacés internes ». Mars 2010. p. 46

<sup>110</sup>Ibidem.

<sup>111</sup>Ibidem.

principio de la responsabilidad sectorial<sup>112</sup>. El principio de la responsabilidad sectorial insta una división del trabajo en el seno de las Naciones Unidas, en 9 sectores diferentes, cada grupo sectorial es dirigido por una agencia u organización internacional experta en el tema<sup>113</sup>. Los grupos sectoriales están a cargo de definir y difundir las normas y políticas, reforzar la capacidad de intervención y proveer un apoyo operacional<sup>114</sup>.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Antonio Guterres, manifestó que los desplazados internos eran el mayor fracaso de la acción humanitaria y que el ACNUR podía jugar un rol mayor en la asistencia de éstas personas<sup>115</sup>. El ACNUR juega un papel de liderazgo en los asuntos relacionados con la protección, el suministro de refugios de emergencia y la gestión de campos de desplazados internos<sup>116</sup>. El líder sectorial se encuentra a cargo de presidir y coordinar la acción del grupo de trabajo a nivel internacional<sup>117</sup>.

El Coordinador del Socorro en Emergencias de la ONU debe coordinar la acción humanitaria en situaciones de emergencia complejas a nivel interno, dentro de las cuales encontramos la protección y asistencia a los desplazados internos<sup>118</sup>. La coordinación es hecha por el Coordinador del Socorro en Emergencias de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en la sede principal de las Naciones Unidas y con un coordinador que se debe encontrar en el terreno<sup>119</sup>. El ACNUR juega también un rol

---

<sup>112</sup>Informal consultative meeting. “The Protection of Internally displaced persons and the role of UNHCR”. 27 février 2007. Traduit par nous. Disponible dans: <http://www.unhcr.org/protection/idps/50f951df9/protection-internally-displaced-persons-role-unhcr-excom-informal-consultative.html> Consulté le 10 août 2016. Point. 3

<sup>113</sup>Groupe de travail sectoriel global sur la protection. « Manuel pour la protection des déplacés internes ». Mars 2010. p.48

<sup>114</sup>Ibidem.

<sup>115</sup>R. COHEN. « Protection of internally displaced persons : National and International responsibilities ». *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 603

<sup>116</sup>UNHCR. Personnes déplacées internes. Disponible dans : <http://www.unhcr.org/fr/personnes-deplacees-internes.html> Consulté le 10 août 2016.

<sup>117</sup>Groupe de travail sectoriel global sur la protection. « Manuel pour la protection des déplacés internes ». Mars 2010. p.48

<sup>118</sup>Groupe de travail sectoriel global sur la protection. « Manuel pour la protection des déplacés internes ». Mars 2010. p. 51

<sup>119</sup>R. COHEN. « Protection of internally displaced persons : National and International responsibilities ». *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 602. Traduit par nous.

mayor en la capacitación de Estados y comunidades afectadas, para que puedan responder de una mejor manera a las situaciones de desplazamiento<sup>120</sup>.

Sin embargo, el principio de la responsabilidad sectorial tiene ciertas lagunas, como el hecho de que entre los sectores de acción, solamente en el campo de la educación encontramos una codirección por una ONG internacional como es *Save the Children*, cuando en principio las organizaciones internacionales deben ser los mayores colaboradores de las organizaciones de Naciones Unidas en el terreno<sup>121</sup>. También hay que resaltar que con ésta mirada, no se toman en cuenta las situaciones de desplazamientos prolongados que son los más comunes en situaciones de desplazamiento interno y que están definidas como situaciones en las que las personas que han sido desplazadas, después de 5 años o más no parecen haber encontrado una solución a su situación, ni por la vía de la repatriación voluntaria, de la integración local o la adaptación a un nuevo lugar<sup>122</sup>. Finalmente, la protección en el campo de los derechos humanos excede continuamente los mandatos y capacidades de las agencias internacionales<sup>123</sup>.

En 2010, el ACNUR y el PNUD en asociación con el Banco Mundial desarrollaron el “*Transitional Solutions approach*” como una iniciativa para proporcionar soluciones durables a los refugiados y a los desplazados internos, por medio de un dialogo entre actores de organizaciones humanitarias multilaterales y diferentes gobiernos, para que éstos últimos den prioridad a las personas que se encuentran en éstas situaciones<sup>124</sup>. El programa tiene 3 líneas de trabajo: el mejoramiento de las condiciones de vida diaria

---

<sup>120</sup>Informal consultative meeting. “The Protection of Internally displaced persons and the role of UNHCR”. 27 février 2007. Traduit par nous. Disponible dans: <http://www.unhcr.org/protection/idps/50f951df9/protection-internally-displaced-persons-role-unhcr-excom-informal-consultative.html> Consulté le 10 août 2016. Point 26.

<sup>121</sup>Ibidem. p. 604

<sup>122</sup>IDCM. « Global overview 2015 : People Internally displaced by armed conflict and violence. » Traduit par nous. p. 65-66

<sup>123</sup>Ibidem.

<sup>124</sup>« Transitional solutions initiative.UNDP and UNHCR in collaboration with the World Bank ».Concept note. Octobre 2010. Disponible dans <http://www.unhcr.org/partners/partners/4e27e2f06/concept-note-transitional-solutions-initiative-tsi-undp-unhcr-collaboration.html>. Consulté le 23 août 2016. point 19. Traduit par nous.

(tierra, acceso a los servicios básicos, desarrollo económico local), el fortalecimiento institucional y, finalmente, la protección de víctimas y sus derechos<sup>125</sup>.

Es así que diferentes organismos subsidiarios de Naciones Unidas ejercen funciones complementarias de ayuda a los desplazados internos<sup>126</sup>. Un ejemplo de esto es la Resolución 44/136 de la Asamblea General, del 27 de febrero de 1990, que atribuyó al Coordinador Residente y Representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la función de coordinar la asistencia a las personas desplazadas internamente, prestada por los diferentes organismos de Naciones Unidas a nivel local<sup>127</sup>. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se comprometió con la protección de los menores, a partir del acuerdo suscrito con el ACNUR en 1995, sus funciones consisten, no solamente en aportar asistencia a los niños, sino también en presentar reclamos contra el reclutamiento forzado de niños o en la búsqueda de familias para los niños no acompañados<sup>128</sup>. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos, es la fuente más grande de provisión de alimentos para las personas desplazadas<sup>129</sup>.

Por fuera del sistema de Naciones Unidas<sup>130</sup>, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la única organización en cuyo acto constitutivo se hace mención de las personas desplazadas, tanto en su preámbulo, como en su artículo primero, incluyendo tanto a los desplazados internos como a aquellos que han atravesado una

---

<sup>125</sup> « Progress update for Colombia-April 2015 ». p. 2. Disponible dans: <http://www.unhcr.org/protection/operations/55534200540/transitional-solutions-initiative-tsi-progress-update.html> Consulté le 23 août 2016. p. 2

<sup>126</sup>O. CASANOVAS. « La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés ». *Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye*. Vol 305. 2005.p. 42

<sup>127</sup>Ibidem.

<sup>128</sup>Ibidem. p. 43

<sup>129</sup>Ibidem.

<sup>130</sup> Por medio de una resolución aprobada por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de febrero de 2016, esta organización se vuelve una organización asociada a Naciones Unidas. L'OIM devient une organisation affiliée aux Nations Unies. [En ligne]. 26 juillet 2016. [Consulté le 5 août 2016]. Disponible à l'adresse :

<https://www.iom.int/fr/news/loim-devient-une-organisation-affiliee-aux-nations-unies>

frontera<sup>131</sup>. El trabajo de esta organización consiste en la organización de transportes necesarios en situaciones de evacuación, de transferencia o de retorno de personas<sup>132</sup>.

Por su parte, el CICR es una organización no gubernamental, contrariamente a los ejemplos anteriormente citados, cuyo trabajo es muy diverso en las áreas de la asistencia y protección, se rige por los principios de independencia e imparcialidad, y ejerce sus funciones en calidad de organismo garante que le reconocen las Convenciones Internacionales en situaciones de conflictos internos e internacionales<sup>133</sup>. El CICR puede actuar rápidamente, ya que no necesita de ningún mandato específico del órgano de una organización internacional<sup>134</sup>. En 2009, el Comité de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, adoptaron una política sobre el desplazamiento interno, que hace énfasis en la importancia del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos frente al desplazamiento, en 10 principios<sup>135</sup>. Esta organización tiene como ventaja el hecho de tener raíces en las diferentes comunidades y un acceso privilegiado a las autoridades en situaciones de desplazamiento interno<sup>136</sup>. Provee también apoyo en situaciones de retorno y reintegración de los desplazados internos<sup>137</sup>. El CICR coordina también el suministro de ayuda con otras organizaciones, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las funciones de los diferentes organismos en el terreno<sup>138</sup>. Sin embargo, el CICR no tiene competencia en situaciones de tensión interna ni en situaciones post conflictuales<sup>139</sup>.

---

<sup>131</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 43.

<sup>132</sup>Ibidem.

<sup>133</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 45

<sup>134</sup>Ibidem.

<sup>135</sup>Ibidem.

<sup>136</sup>« Movement Policy on Internal Displacement. Document prepared by the International Committee of the Red Cross and Red Crescent Societies for the Council of Delegates of the international Red Cross and Red Crescent Movements. Nairobi, Kenya, 23-25 november 2009. » *International Review of the Red Cross*. Volume 91. Number 875. Septembre 2009. p. 594. Traduit par nous.

<sup>137</sup>Ibidem. p. 597

<sup>138</sup>Ibidem.

<sup>139</sup>R. COHEN. « Protection of internally displaced persons : National and International responsibilities ». *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 606

## CAPÍTULO II.

### EL CONTENIDO DE LOS PRINCIPIOS

Los treinta Principios rectores del desplazamiento interno están destinados a los Estados que tienen desplazamientos internos en sus territorios. Estos se dividen en tres tipos de principios: los principios generales, los principios relativos a la protección contra el desplazamiento y los principios relativos a la ayuda humanitaria (Sección I). Los Principios se inspiran en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario<sup>140</sup>. Los principios rectores toman en cuenta factores como el retorno, la reintegración local o la reinstalación como soluciones durables al desplazamiento. Sin embargo, no se hace ninguna referencia explícita a la restitución de tierras ni a la forma en la que las personas desplazadas pueden recuperar sus hogares o bienes. Ésta laguna fue llenada por la creación de los Principios sobre restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y desplazados, o Principios Pinheiro de 2005 (Sección II).

### SECCIÓN I.

#### Los principios rectores de los desplazamientos internos

Los Principios rectores de los desplazamientos internos de 1998, asumen un punto de vista dinámico teniendo en cuenta los diferentes momentos en que tuvieron lugar los desplazamientos: principios relativos a la protección contra los desplazamientos (Parágrafo I), principios relativos a la protección en el transcurso del desplazamiento (Parágrafo II), principios relativos a la asistencia humanitaria, y principios relativos al retorno, la reinstalación y el reintegro (Parágrafo III)<sup>141</sup>.

#### *§ 1. Principios generales relativos a la protección contra el desplazamiento*

---

<sup>140</sup>C. CURNIL. « L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009.p. 8

<sup>141</sup>O. CASANOVAS. « La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés ». *Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye*. Vol 305. 2005. p. 76



Los Principios rectores parten del principio general de igualdad entre los desplazados internos y el resto de la población civil, las personas no deben ser objeto de ninguna discriminación por su condición de desplazados (Principio 1). Por otra parte, los principios deben emplearse “sin discriminación”, es decir, que se aplican a todas las autoridades, grupos o personas sin tomar en cuenta su status jurídico y no pueden aminorar las disposiciones de los diferentes textos internacionales relativas a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, ni las disposiciones del derecho interno, tampoco pueden causar daño a la institución del asilo (Principio 2)<sup>142</sup>.

El principio 3, como ya se había mencionado, trata sobre la responsabilidad primera del Estado en la asistencia y atención de las personas desplazadas. El principio 4 trata también sobre discriminación, pero se diferencia del principio 1 en que éste trata de la discriminación entre los desplazados y el resto de la población, mientras que el principio 4 trata sobre la prohibición de discriminación entre los mismos desplazados por razones de raza, lengua, religión, entre otros<sup>143</sup>. Sin embargo, en ciertos casos hay que tener en cuenta las particularidades especiales de ciertos grupos de personas como son los casos de los niños, mujeres embarazadas, personas en situación de discapacidad, entre otros (Parágrafo 2, Principio 4).

El Principio 5 señala la importancia del respeto del derecho internacional para la prevención del desplazamiento<sup>144</sup>. El derecho a no ser desplazado arbitrariamente se encuentra en el principio 6, que enumera algunas situaciones susceptibles de constituir un desplazamiento arbitrario como son las políticas de apartheid, los conflictos armados, los proyectos de desarrollo en gran escala, los desastres o los castigos colectivos<sup>145</sup>. Este derecho tiene una relación directa con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que encontramos el derecho de libre

---

<sup>142</sup>W. KALIN. « Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Notes explicatives. » Société américaine de droit international. 2008. p. 32

<sup>143</sup>Ibidem. p. 37

<sup>144</sup>Ibidem. p. 41

<sup>145</sup>O. CASANOVAS. « La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés ». Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 78

circulación<sup>146</sup>. El principio 7 describe las normas que se deben seguir cuando hay un desplazamiento en curso<sup>147</sup>. Se debe prestar una atención particular a las personas que tienen un lazo particularmente fuerte con sus tierras (principio 9)<sup>148</sup>.

## § 2. Principios relativos a la protección durante el desplazamiento

Los Principios rectores reiteran los derechos humanos reconocidos por los textos internacionales y en su sección III (principio 10 al 23) hacen referencia a la protección durante el desplazamiento<sup>149</sup> de: el derecho a la vida (principio 10), derecho a la dignidad humana e integridad física, mental o moral (principio 11) en relación con la prohibición de la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes; el derecho a la libertad y seguridad (principio 12), derecho a la libre circulación durante el desplazamiento (principio 14), derecho al respeto de su vida familiar (principio 17), derecho a su propiedad y posesiones (principio 21); derecho al empleo y a participar en actividades económicas (principio 22); derecho a los servicios sociales de educación (principio 23); derecho a la atención y cuidados médicos (principio 19, numeral 1)<sup>150</sup>.

También se reconoce el derecho a disponer de los documentos necesarios (pasaporte, documentos de identidad, certificados, etc.) y si éstos se perdieron durante el desplazamiento, las personas tienen derecho a que se les expidan nuevos documentos (principio 20, numeral 2)<sup>151</sup>. El principio 13 trata sobre la prohibición del alistamiento de niños y personas desplazadas y se evitará que tomen parte en las hostilidades. Por su parte, el principio 15 establece que las personas desplazadas tienen derecho a solicitar asilo en otro país, y no pueden ser forzadas a regresar a lugares donde su vida o

---

<sup>146</sup>W. KALIN. « Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Notes explicatives. » Société américaine de droit international. 2008. p. 44

<sup>147</sup>Ibidem. p. 55

<sup>148</sup> Este principio hace referencia a los pueblos indígenas, los campesinos, los ganaderos, entre otros.

<sup>149</sup>W. KALIN. *The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.618. Traduit par nous.

<sup>150</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 79

<sup>151</sup>Ibidem. p. 80

seguridad corren riesgo<sup>152</sup>. Podríamos mirar ésta disposición como una especie de analogía al principio de *non-refoulement* aplicable a los refugiados, en efecto, éste principio en el derecho de los refugiados, establece que un Estado no puede expulsar o devolver bajo ninguna circunstancia, un refugiado hacia un territorio donde la persona tiene un temor fundado de persecución<sup>153</sup>. Walter Kälin es partidario de ésta idea, ya que considera que si los Estados son responsables por la violación de éste principio en el derecho internacional de los refugiados y por el regreso forzado de no-nacionales a situaciones de peligro, se debería aplicar el mismo razonamiento a los desplazados internos<sup>154</sup>.

Las personas desplazadas tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos (principio 16). El principio 18 habla de un nivel de vida suficiente, estableciendo que las personas en situación de desplazamiento tienen derecho a una alimentación básica, agua potable, refugio y vivienda, ropa adecuada y acceso a servicios médicos y a instalaciones de salud, lo anterior debe ser garantizado por las autoridades y se relaciona con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>155</sup>.

### **§ 3. Principios relativos al regreso, la reintegración o el reasentamiento en otra parte del país**

Los Principios 28 a 30, tratan sobre las soluciones duraderas para las personas desplazadas por las vías del retorno, el reasentamiento y la reintegración. Según Walter Kälin, se logra una solución duradera cuando las personas desplazadas no requieren más asistencia o protección y pueden ejercer sus derechos sin ninguna discriminación

---

<sup>152</sup>W. KALIN. « Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Notes explicatives. » Société américaine de droit international. 2008. p. 90

<sup>153</sup>Artículo 33. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 1951.

<sup>154</sup>P. ORCHARD. "Protection of internally displaced persons: soft law as a norm-generating mechanism". *Review of International Studies*. Vol. 36. N°2. Avril 2010. p. 298. Traduit par nous.

<sup>155</sup>W. KALIN. « Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Notes explicatives. » Société américaine de droit international. 2008. p. 104

relacionada con el desplazamiento<sup>156</sup>. El retorno es, frecuentemente, considerado como la mejor solución y diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho de las personas que se encuentran fuera del territorio del cual son nacionales, de volver a su país de origen, como lo establece el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 12 (4) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 13 del Protocolo N°4 de la Convención Europea de Derechos Humanos<sup>157</sup>.

Podemos encontrar una relación con el derecho de los refugiados, ya que éstos pueden volver a su país de origen una vez cesan las circunstancias de persecución a las que han debido afrontarse<sup>158</sup>. Hay que precisar entonces dos condiciones esenciales a las que debe obedecer el regreso: por una parte, el regreso debe ser voluntario y no forzado, y por otra parte, el regreso debe darse en condiciones de seguridad para la población, que no puede verse de nuevo enfrentada a los peligros causaron su desplazamiento<sup>159</sup>.

Cabe resaltar que los Principios rectores de los desplazamientos internos consideran que las autoridades “*tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos*” (principio 28). El principio 29 habla sobre la posibilidad que tienen los desplazados de recuperar sus hogares y si esto no fuere posible, de obtener una compensación<sup>160</sup>. Éste mismo artículo nos dice que, cuando las personas regresan a sus hogares, tienen también derecho a recuperar, en la medida de lo posible, las posesiones que debieron abandonar en el momento de la partida<sup>161</sup>.

---

<sup>156</sup>W. KALIN. « Report of the Secretary General on the human rights of internally displaced persons. Framework on durable solutions for Internally Displaced Persons ».A/HCR/13/21/ Add. 4. 29 decembre 2009. p. 2

<sup>157</sup>W. KALIN. « Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Notes explicatives. » Société américaine de droit international. 2008. p. 152-153

<sup>158</sup>Líteral C. Artículo primero. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 1951.

<sup>159</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 85

<sup>160</sup>W. KALIN. *The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons*. Research handbook on International Law and Migration. 2014. p.619. Traduit par nous.

<sup>160</sup>O. CASANOVAS. *La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les conflits armés*. Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye. Vol 305. 2005. p. 86

<sup>161</sup>Principio 29, parágrafo 2. Principios rectores sobre desplazamiento interno.

En 2005, la publicación de los Principios sobre la restitución de viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, profundizó sobre el regreso y la restitución de viviendas y patrimonio.

## **SECCIÓN II**

### **Una laguna subsanada por los Principios Pinheiro**

Por medio de una resolución adoptada por consenso<sup>162</sup>, la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, solicitó al ACNUR y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la elaboración de unos principios rectores que sirvieran para promover y facilitar el derecho de regresar a sus hogares o lugares de residencia de forma segura, a todas las personas refugiadas y desplazadas internamente. Luego, el relator especial de la Subcomisión de Derechos Humanos sobre la restitución de viviendas y bienes, Paulo Sergio Pinheiro, elaboró un estudio sobre ésta cuestión del 2002 al 2005. Como resultado de dicho estudio los Principios sobre la Restitución de las viviendas y el Patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas fueron adoptados por la Subcomisión de Derechos Humanos el 11 de agosto de 2005<sup>163</sup>.

Los 23 Principios reúnen en un mismo documento los elementos jurídicos, políticos, procesales, institucionales y técnicos relativos a la puesta en práctica de la restitución de viviendas y bienes<sup>164</sup>. Estos Principios se aplican a situaciones en las que las personas se han visto privadas arbitrariamente o de manera ilegal de sus viviendas, bienes o lugares de residencia<sup>165</sup> y se aplican en todos los casos de desplazamiento involuntario de personas, sin importar la causa que dio lugar a dicho desplazamiento<sup>166</sup>.

---

<sup>162</sup> Sous-Commission des droits de l'homme. Résolution 1998/26 du 26 août 1998. E/CN.4/SUB.2/RES/1998/26.

<sup>163</sup> Manuel sur la restitution des logements et des biens des réfugiés et des personnes déplacées. Pour la mise en oeuvre des Principes Pinheiro. Mars 2007. p. 11

<sup>164</sup> Ibidem.

<sup>165</sup> Principio 1.1. Principios sobre la restitución de viviendas y patrimonio. 2005.

<sup>166</sup> Manuel sur la restitution des logements et des biens des réfugiés et des personnes déplacées. Pour la mise en oeuvre des Principes Pinheiro. Mars 2007. p. 16

Los Principios favorecen las soluciones fundadas en la restitución de viviendas y patrimonio, como lo establece el Principio 2 (Parágrafo I) así como el respeto de los derechos fundamentales (Parágrafo II).

### ***§ 1. Una prioridad dada a la restitución***

La restitución es un recurso equitativo, gracias al cual las víctimas pueden volver, en la medida de lo posible, a la situación en la que se encontraban antes del evento que dio lugar a su desplazamiento<sup>167</sup>. El Manual sobre la restitución de viviendas y del patrimonio de refugiados y personas desplazadas señala que *“el restablecimiento del Estado de Derecho y la protección física de las personas que quieren recuperar sus hogares son las dos condiciones previas más importantes para el éxito de los programas de restitución”*<sup>168</sup>.

No se dará una indemnización, a menos que se pruebe que se intentaron todas las soluciones fundadas en la restitución y que las mismas no prosperaron, o a menos que las víctimas hayan optado voluntariamente por ésta solución (Principio 21)<sup>169</sup>. Hay que señalar que el derecho a la restitución de viviendas y patrimonio no se ve afectado por el hecho que las personas no regresen al lugar del cual fueron desplazados, por encontrarse reasentadas o reintegradas en otro lugar<sup>170</sup>.

Los Principios de la sección V (principios 11 al 21) son relativos a las cuestiones jurídicas, políticas y procesales, así como a los obstáculos que se pueden dar al momento de la puesta en práctica de la restitución<sup>171</sup>. Algunos de los obstáculos a los que los desplazados se pueden ver enfrentados son: la ocupación secundaria, la destrucción de bienes, la pérdida o destrucción de registros de propiedad, la ineficacia de las

---

<sup>167</sup>Ibidem. p. 24

<sup>168</sup>Ibidem. p. 84

<sup>169</sup>Ibidem. p. 25

<sup>170</sup>Ibidem. p. 27

<sup>171</sup>Ibidem. p. 56

instituciones y la discriminación en los programas de restitución<sup>172</sup>. Los procesos de restitución se deben encontrar acordes con las normas internacionales de derechos humanos, del derecho de los refugiados y del derecho internacional humanitario, así como a sus normas conexas<sup>173</sup>. El principio 18 nos dice que para que los programas y políticas de restitución sean posibles, es necesario que el derecho a la restitución de tierras, de viviendas y de bienes sea reconocido por la ley, es decir, que los países deben adoptar legislaciones nacionales que traten sobre éste tema<sup>174</sup>.

## **§ 2. Una gran importancia acordada a los derechos fundamentales**

Los Principios 3 a 9 mencionan los principios fundamentales que hay que tener en cuenta al momento de la restitución<sup>175</sup>. Encontramos entonces los principios de no discriminación (Principio 3), la igualdad entre hombres y mujeres (Principio 4), el derecho a ser protegido contra el desplazamiento (Principio 5), el derecho a la intimidad y al respeto del hogar (Principio 6), el derecho al disfrute pacífico de sus bienes (Principio 7), el derecho a una vivienda adecuada (Principio 8) y el derecho a la libertad de circulación y a la libre escogencia de vivienda (Principio 9).

El artículo 22 trata sobre el rol de la comunidad internacional y de las organizaciones internacionales en la restitución. Las organizaciones internacionales de la ONU y los demás organismos deben supervisar la puesta en práctica de programas de restitución de viviendas y patrimonio<sup>176</sup>. Finalmente, el Principio 23 concluye que éstos principios no deben limitar los derechos que ya han sido acordados por otras normas internacionales.

Después de haber tratado en una primera parte, tanto los Principios rectores del desplazamiento interno, como los Principios sobre la Restitución de Viviendas y Patrimonio de los refugiados y personas desplazadas, que no tienen fuerza vinculante,

---

<sup>172</sup>Ibidem. p. 56

<sup>173</sup>Principio 11. Principios sobre la restitución de viviendas y patrimonio. 2005.

<sup>174</sup>Principio 11. Principios sobre la restitución de viviendas y patrimonio. 2005.

<sup>175</sup>Ibidem. p. 32

<sup>176</sup>Ibidem. p. 91

vamos a interesarnos por algunas iniciativas de crear instrumentos más firmes y vinculantes para dar mejores respuestas a los desplazados internos.



## **PARTE II.**

### **INSTRUMENTOS VINCULANTES FRENTE AL DESPLAZAMIENTO**

En el mundo entero, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas y se han encontrado en situaciones de desplazamiento prolongado. En efecto, a finales del 2014, 38 millones de personas se encontraban desplazadas internamente por conflictos armados o situaciones de violencia generalizada<sup>177</sup>. Como consecuencia de lo anterior, después de la expedición de los principios, se hicieron intentos tanto a nivel regional como nacional para tratar este problema y dar una respuesta efectiva a las personas que se encontraban en ésta situación.

La difícil situación de las personas desplazadas internamente por conflictos armados se evidencia principalmente en África, que tiene aproximadamente 10 millones de personas desplazadas, y en Colombia que tiene aproximadamente 6 millones de desplazados<sup>178</sup>. Tanto el África como Colombia han soportado largos conflictos internos. De hecho, en 2010, 10 países africanos veían grandes desplazamientos forzados como consecuencia de conflictos armados, violencia generalizada y violaciones a los derechos humanos<sup>179</sup>.

Por su parte, Colombia vive un conflicto interno que tiene hoy en día 52 años con la guerrilla de las FARC, pero también hay otros grupos armados como el ELN y los grupos paramilitares, que se enfrentan entre ellos por el control del territorio. Ésta situación ha dado lugar a millones de desplazados internos y ha hecho que Colombia sea considerado como el segundo país en número de personas desplazadas internamente, a nivel mundial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 1999, consideró que la situación en Colombia era de tal magnitud que la calificó como uno de los aspectos más graves de la protección de los derechos humanos.

Estos factores han hecho que tanto Colombia como los diferentes países africanos hayan buscado dar solución a éste fenómeno a nivel nacional, creando leyes sobre el mismo.

---

<sup>177</sup>IDCM. « Global overview 2015 : People Internally displaced by armed conflict and violence. » Traduit par nous.p.7

<sup>178</sup>IDCM. « Global overview 2015 : People Internally displaced by armed conflict and violence. » Traduit par nous.p.7

<sup>179</sup>A.M. ESSOUNGOU. « Personnes déplacées : vers la fin du calvaire ». Avril 2010. Disponible dans : <http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/april-2010/personnes-déplacées-vers-la-fin-du-calvaire>. Consulté le 10 octobre 2016.

Sin embargo, el África fue un poco más lejos y estuvo a la cabeza de la elaboración de un instrumento vinculante a nivel regional para tratar sobre la responsabilidad de los Estados frente al fenómeno del desplazamiento interno<sup>180</sup>. Se trata de la Convención de Kampala para la atención y protección de los desplazados internos en África de 2009 (Capítulo I). Hasta ahora ninguna otra región ha seguido los pasos de la Unión Africana, sin embargo, consideramos que la situación colombiana es de tal magnitud, que nos vamos a interesar por la legislación que ha sido adoptada a nivel nacional para enfrentar ésta situación (Capítulo II).

---

<sup>180</sup>R. COHEN. « Protection of internally displaced persons :National and International responsibilities ». *Reasearch handbook on International law and migration*.2014. p. 597. Traduit par nous.

# CAPITULO I.

## LAS INNOVACIONES NORMATIVAS DEL CONTINENTE AFRICANO

En un principio, éste continente se interesó por adoptar normas en las diferentes legislaciones nacionales, después hubieron eventos importantes a nivel regional como la Conferencia Regional organizada por la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental (IGAD) en 2003, el taller de Addis Ababa organizado bajo el auspicio de la Organización de la Unión Africana en octubre de 1998 y la Primera Conferencia sobre Desplazamiento Interno al oeste de África, que tuvo lugar en Abuja, Nigeria en 2006<sup>181</sup>.

Otra innovación del continente africano fue el hecho que la Comisión de Derechos Humanos y del pueblo africano en 2003, decidió hacer un seguimiento a las situaciones de derechos humanos de las personas refugiadas y desplazadas, para luego convertirse en un mandato específico del Relator Especial para los refugiados, solicitantes de asilo, personas desplazadas internamente y migrantes en África, posición que fue creada en 2004<sup>182</sup>. El África con la adopción del Pacto por la Seguridad, Estabilidad y Desarrollo de la región de los Grandes Lagos en 2006 y posteriormente con la adopción de la Convención de Kampala en 2009, estuvo a la cabeza de la creación de un instrumento vinculante frente al desplazamiento (Sección I). Nos vamos a interesar entonces, principalmente, a el contenido de las normas de la Convención regional (Sección II).

### SECCIÓN I.

#### La Adopción de un instrumento vinculante

En diciembre de 2006, tuvo lugar la Conferencia Internacional de la región de los Grandes Lagos que tenía como principal objetivo reunir a los países de la región “*para dialogar*

---

<sup>181</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*.2014. p. 651. Traduit par nous.

<sup>182</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*.2014. p. 653. Traduit par nous.

y convenir una estrategia para aportar paz y prosperidad en la región de los Grandes Lagos”<sup>183</sup>. Se llevaron a cabo consultas con los gobiernos, ONG y organizaciones de la sociedad civil de la región y como resultado se creó el Pacto para la Seguridad, Estabilidad y el Desarrollo de ésta región de África. Se trata de un conjunto de leyes, programas de acción y mecanismos nuevos, que crean un marco para el desarrollo económico de ésta región<sup>184</sup>.

El proceso para la adopción del Pacto se dividió en cuatro pilares: la paz y la seguridad, la democracia y buen gobierno, el desarrollo económico y la integración regional, y las cuestiones humanitarias y sociales<sup>185</sup>. El Pacto comprende no solamente el instrumento principal, que es el pacto en sí, sino también la Declaración de Dar es Salaam, diez protocolos, cuatro programas de acción y un conjunto de mecanismos de puesta en práctica e instituciones<sup>186</sup>. Dicho Pacto entró en vigor el 21 de junio de 2008<sup>187</sup>.

Entre los Protocolos que fueron adoptados con el Pacto, podemos encontrar el Protocolo sobre la Protección y Asistencia a las personas internamente desplazadas y el Protocolo sobre los derechos de propiedad de las poblaciones que retornan, que se encuentran reagrupados en el pilar humanitario y social (Parágrafo I)<sup>188</sup>. Además, en julio de 2004, el Comité Ejecutivo de la Unión Africana tomó una decisión por medio de la cual pidió a la Comisión de la Unión Africana, que adoptara un instrumento vinculante sobre los desplazados internos, para proporcionarles un marco normativo que asegurara su protección y asistencia<sup>189</sup>. Como consecuencia de lo anterior, se adoptó la Convención de Kampala en 2009 (Parágrafo II).

---

<sup>183</sup>IDMC, IRRI et NRC. « Le Pacte sur les Grands Lacs et les droits des personnes déplacées. Guide pour la société civile ». Septembre 2008. p. 7

<sup>184</sup>Ibidem. p. 8

<sup>185</sup>Ibidem. p. 9

<sup>186</sup>Ibidem. p. 10

<sup>187</sup>Ibidem.

<sup>188</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*.2014. p. 652.

<sup>189</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*.2014. p. 654. Traduit par nous

## ***§ 1. Los Protocolos de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos.***

El Protocolo para la Protección y Asistencia de las personas internamente desplazadas tiene cuatro objetivos: el establecimiento de un marco normativo en la región de los Grandes Lagos, para asegurar la adopción e implementación de los Principios rectores de los desplazamientos por los países miembros; asegurar una protección legal para garantizar la seguridad física y material de los desplazados internos según lo establecido en los principios rectores; proporcionar una base legal para la incorporación de los Principios rectores en las legislaciones nacionales de los Estados miembros; y que los Estados miembros se comprometan a prevenir y eliminar las causas que dan origen a los desplazamientos<sup>190</sup>. Los Principios rectores sobre el desplazamiento interno están en el centro del Protocolo y se encuentran anexos al texto del mismo, haciendo de éste instrumento, el primero dedicado a la puesta en práctica de los principios rectores que tienen un valor legal<sup>191</sup>. El Protocolo compromete a los Estados no únicamente a adoptar una legislación que tome en cuenta los principios, sino también a asegurar que se cree un marco para su efectiva puesta en práctica<sup>192</sup>.

El Protocolo recomienda igualmente a los Estados “*hacer lo necesario para facilitar la alianza y la cooperación entre las instancias del gobierno, los organismos de Naciones Unidas, la Unión Africana y la sociedad civil*”<sup>193</sup> en lo que atañe a la ayuda y asistencia humanitaria. El Protocolo trata también sobre el desplazamiento debido a los proyectos de desarrollo a gran escala en su artículo 15<sup>194</sup>. Dicho protocolo, menciona también una especificidad de la región, al establecer que los Estados pueden tener la necesidad de garantizar una protección especial para las familias que pertenecen a un grupo étnico mixto, pero no define como se debe llevar a cabo ésta protección<sup>195</sup>.

---

<sup>190</sup>Ibidem.

<sup>191</sup>IDMC, IRRRI et NRC. « Le Pacte sur les Grands Lacs et les droits des personnes déplacées. Guide pour la société civile ». Septembre 2008. p. 12

<sup>192</sup>Ibidem. p. 14

<sup>193</sup>Ibidem. p. 15

<sup>194</sup>Ibidem.

<sup>195</sup>Ibidem. p. 18

Por su parte, el Protocolo sobre los Derechos de Propiedad de las Poblaciones que retornan aborda de manera exhaustiva la protección jurídica del patrimonio de los refugiados y de las personas desplazadas, mediante la instauración de principios jurídicos, para que éstas personas puedan recuperar sus bienes a su regreso con la ayuda de la administración local y de las autoridades administrativas particulares<sup>196</sup>. Se trata del primer instrumento jurídicamente vinculante que trata sobre los derechos de propiedad de los repatriados<sup>197</sup>. Dicho Protocolo, proporciona una base jurídica para la resolución de conflictos, hace énfasis en las necesidades de protección de las personas más vulnerables y prevé recursos jurídicos en caso de pérdida o destrucción de los bienes<sup>198</sup>.

El Protocolo prevé también que los litigios relativos a los bienes de la población desplazada, deben ser resueltos tanto por las autoridades administrativas como por las autoridades tradicionales<sup>199</sup>. Se exige a los Estados que pongan en marcha “*un dispositivo accesible de registro de bienes, en el que se reconozcan los títulos de propiedad (incluidos los de tierras), que fueron manejados a la vez por el sistema de ocupación de tierras consuetudinario y por el sistema legal*”<sup>200</sup>. El Estado debe dar una indemnización a las personas que no pueden recuperar sus bienes por una acción imputable a dicho Estado<sup>201</sup>. El artículo 7 del Protocolo presta una protección especial a las comunidades cuyo sustento consiste en un apego particular con la tierra<sup>202</sup>.

## § 2. *La Convención de Kampala*

---

<sup>196</sup>W. KALIN. « Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Notes explicatives. » Société américaine de droit international. 2008. p. 168

<sup>197</sup>IDMC, IIRI et NRC. « Le Pacte sur les Grands Lacs et les droits des personnes déplacées. Guide pour la société civile ». Septembre 2008. p. 19

<sup>198</sup>W. KALIN. « Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Notes explicatives. » Société américaine de droit international. 2008. p. 168.

<sup>199</sup>IDMC, IIRI et NRC. « Le Pacte sur les Grands Lacs et les droits des personnes déplacées. Guide pour la société civile ». Septembre 2008. p. 19

<sup>200</sup>IDMC, IIRI et NRC. « Le Pacte sur les Grands Lacs et les droits des personnes déplacées. Guide pour la société civile ». Septembre 2008. p. 19

<sup>201</sup>Ibidem. p. 23

<sup>202</sup>Ibidem. p. 24

La Comisión de la UA respondió a la solicitud del Comité Ejecutivo de la Unión Africana, convocando a una reunión de expertos independientes que tuvo lugar en mayo del 2006 y que adoptó un primer proyecto sobre las personas desplazadas internamente<sup>203</sup>. Luego, la Comisión de la UA, decidió convocar otra reunión para tratar el tema del desplazamiento, en ella participaron expertos de diferentes Estados miembros pero también organizaciones internacionales importantes como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos; como resultado de ésta reunión, se elaboró un nuevo proyecto en el 2008<sup>204</sup>. Dicho proyecto fue presentado en la Cumbre especial para los refugiados, retornados, y desplazados internos, que tuvo lugar en Kampala, Uganda del 19 al 23 de octubre de 2009<sup>205</sup>.

En la Cumbre de Kampala, se reunieron una vez más jefes de Estado, representantes de organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad de donantes; al final de éste evento, los Estados miembros adoptaron la Declaración de Kampala que plantea los principios filosóficos para la protección de los desplazados internos en África<sup>206</sup>. Esta declaración hace referencia a los principios Panafricanos para la solidaridad entre Estados del África y reafirma la determinación de los Estados miembros de continuar proporcionando protección y asistencia a los desplazados internos, así mismo, reconoce que el África tiene el mayor número de personas refugiadas, desplazadas y retornadas del mundo entero<sup>207</sup>.

Finalmente, la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia para los desplazados internos en África o Convención de Kampala, fue adoptada el 23 de octubre de 2009 y entró en vigor el 6 de diciembre del 2012. Es el primer instrumento

---

<sup>203</sup>Ibidem.

<sup>204</sup>Ibidem.

<sup>205</sup>Ibidem.

<sup>206</sup>Ibidem.

<sup>207</sup>Ibidem.



regional jurídicamente vinculante sobre los desplazados internos<sup>208</sup>. Los objetivos de dicha Convención son crear un marco jurídico apropiado para aportar una protección y una asistencia a las personas desplazadas en África y prevenir los fenómenos de migraciones forzadas internas<sup>209</sup>.

## **SECCIÓN II. El Contenido de las Normas de la Convención de Kampala**

La Convención de Kampala tiene 22 artículos de los cuales 15 hablan sobre la protección y los otros siete son disposiciones finales sobre la ratificación, entrada en vigor, las modificaciones, la revisión, las reservas y la solución de controversias<sup>210</sup>. Las disposiciones de la Convención tratan, en primer lugar, sobre la protección contra el desplazamiento, en segundo lugar, sobre la protección y asistencia durante el desplazamiento y finalmente, sobre la búsqueda de soluciones duraderas para los desplazados internos, siguiendo el modelo de los Principios rectores sobre desplazamiento interno (Parágrafo I)<sup>211</sup>. Además, la Convención innova en ciertos aspectos de la protección de los desplazados (Parágrafo II).

### ***§ 1. La conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos***

La Convención trae una lista de definiciones en su artículo primero, entre las que encontramos la definición de persona desplazada que se ajusta a la definición de los Principios rectores, pero encontramos también la definición de desplazamiento interno que es “*el movimiento involuntario o forzado, la evacuación o la reubicación de*

---

<sup>208</sup>Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays. M. Chaloka Beyani. 4 avril 2014. A/HRC/26/33. Point 27.

<sup>209</sup>C. COURNIL. « L’urgence d’un droit pour les personnes déplacées internes ». *Revue québécoise de droit international*. 2009. p. 16

<sup>210</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 655. Traduit par nous

<sup>211</sup>Ibidem.

*personas o grupos de personas dentro de las fronteras de Estado internacionalmente reconocidas”*<sup>212</sup>.

La Convención menciona los Principios rectores sobre desplazamiento interno en su preámbulo y los reproduce, partiendo del principio que es el Estado el primer responsable de la protección y asistencia de las personas desplazadas que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción (Artículo 5)<sup>213</sup>. Sin embargo, en caso de insuficiencia de recursos, éste mismo artículo en su numeral 6 nos dice que los Estados deben cooperar para solicitar la asistencia de organizaciones internacionales o humanitarias, de organizaciones de la sociedad civil y de otros actores implicados<sup>214</sup>. En éste mismo artículo, se prevé que las organizaciones internacionales deben respetar sus obligaciones y las reglas del país en el que se encuentran, así como los derechos humanos de los desplazados internos<sup>215</sup>. Estas organizaciones se rigen por los principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad<sup>216</sup>.

La Convención no trae ninguna disposición relativa a la cesación de la condición de desplazado, sin embargo, los Estado parte tienen la obligación de evitar las situaciones de desplazamiento que se prolongan en el tiempo<sup>217</sup>. El artículo 11 habla sobre el retorno, la integración local o la reubicación y recuerda la obligación de los Estados de poner fin a los desplazamientos por “la promoción y creación de soluciones satisfactorias para el retorno voluntario, la integración local o la reubicación sobre una base sustentable y en circunstancias de seguridad y dignidad”<sup>218</sup>.

---

<sup>212</sup>Ibidem.

<sup>213</sup>Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays. M. Chaloka Beyani. 4 avril 2014. A/HRC/26/33. Point 45.

<sup>214</sup>Ibidem. Point 56.

<sup>215</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 665. Traduit par nous

<sup>216</sup>Ibidem.

<sup>217</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 660. Traduit par nous

<sup>218</sup> Parágrafo 1. Artículo 11. Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África. 2009.

Según Elisabeth Ferris del Instituto Brookings, hay cuatro elementos que se deben tomar en cuenta para saber si una solución duradera ha sido alcanzada: las autoridades nacionales establecieron las condiciones para un retorno seguro o una reubicación segura y digna, las personas desplazadas pueden gozar de sus derechos al igual que todos los nacionales del país, los observadores internacionales son capaces de proporcionar asistencia y hacer seguimiento de las personas que se encontraban en una situación de desplazamiento, y finalmente, la solución es duradera y sostenible<sup>219</sup>. En su artículo 12, la Convención trata sobre el derecho que tienen las personas afectadas por el desplazamiento, a un recurso efectivo, incluida una compensación justa y equitativa y otras formas de reparación<sup>220</sup>.

## **§ 2. Las innovaciones aportadas por éste instrumento regional**

Este instrumento innova previendo garantías contra los desplazamientos forzados, y enunciando normas sobre la protección y asistencia que debe ser otorgada a éstas personas durante los desplazamientos, también habla sobre soluciones duraderas<sup>221</sup>. La Convención define las obligaciones y responsabilidades de los Estados partes, indicando igualmente las responsabilidades y roles específicos de los grupos armados no estatales, de sociedades privadas, de organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, de la comunidad internacional, de las personas desplazadas y de las comunidades que se han visto afectadas por el desplazamiento (Artículo 2, literal d)<sup>222</sup>. A lo largo de la Convención, encontramos que los Estados partes deben consultar a las personas desplazadas y debe permitírseles una participación en la toma de decisiones relativas a su protección y asistencia, incluidos los asuntos relacionados con las soluciones duraderas<sup>223</sup>.

---

<sup>219</sup>Citée par M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 660-661. Traduit par nous

<sup>220</sup>Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays. M. ChalokaBeyani. 4 avril 2014. A/HRC/26/33. Point 51.

<sup>221</sup>Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays. M. ChalokaBeyani. 4 avril 2014. A/HRC/26/33. Point 28.

<sup>222</sup>Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays. M. ChalokaBeyani. 4 avril 2014. A/HRC/26/33. Point 28.

<sup>223</sup>Ibidem. Point 61.

Otro elemento innovador de éste instrumento, es el hecho que reconoce que los actores no estatales y los miembros de grupos armados pueden ser tenidos como responsables por el rol que desempeñaron en los desplazamientos involuntarios o forzados<sup>224</sup>. Para luchar contra la impunidad, la Convención prevé que se comprometa la responsabilidad de los grupos armados por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas desplazadas, precisando que estos grupos son penalmente responsables por los actos que vulneren los derechos humanos de las personas desplazadas y el derecho internacional humanitario<sup>225</sup>. Sin embargo, la Convención recuerda que no se da ningún estatus jurídico a los grupos armados<sup>226</sup>, y estos grupos a su vez argumentan que al no haber sido consultados para la adopción de éste instrumento, no se encuentran ligados a él<sup>227</sup>.

La Convención señala también que la Unión Africana desempeña un rol mayor de apoyo a los Estados miembros; en particular, debe coordinar la movilización de recursos para la protección y asistencia de las personas desplazadas<sup>228</sup>. Según el artículo 8 de la Convención de Kampala, la UA puede también intervenir en circunstancias graves como es el caso de los crímenes de guerra, del genocidio y de los crímenes contra la humanidad, en conformidad con el artículo 4 (h) del acto constitutivo de la Unión Africana<sup>229</sup>. Dicho Acto proclama como principio el hecho que la UA puede “*intervenir en un Estado miembro con una decisión de la Conferencia, en ciertas situaciones graves como son: los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad*”<sup>230</sup>. Sin embargo, la Convención

---

<sup>224</sup>Ibidem. Point 59.

<sup>225</sup>Ibidem.

<sup>226</sup>Parágrafo 1. Artículo 7. Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África. 2009.

<sup>227</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 663. Traduit par nous

<sup>227</sup>Ibidem. Point 61.

<sup>228</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 660. Traduit par nous

<sup>229</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*. 2014. p. 660. Traduit par nous

<sup>230</sup>Alinéa h. Article 4. Acte Constitutif de l’Union Africaine. 11 juillet 2000.

no trae ninguna disposición que obligue a la UA a prevenir el desplazamiento forzado de la población<sup>231</sup>.

El artículo 3 de la Convención reconoce la obligación de los Estados de prohibir y prevenir el desplazamiento arbitrario de la población, así como la obligación de prevenir ciertas causas de desplazamiento interno, como la exclusión y marginación política, social y cultural, y la obligación de respetar y proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario<sup>232</sup>. Ésta convención define el desplazamiento arbitrario como el:

*“a) Desplazamiento basado en políticas de discriminación racial u otras prácticas similares destinadas a alterar la composición étnica, religiosa o racial de la población o que tengan ese resultado;*

*b) El desplazamiento individual o masivo de civiles en situaciones de conflicto armado, a menos que lo demanden la seguridad de los civiles afectados o razones militares imperativas, de acuerdo con el derecho internacional humanitario;*

*c) El desplazamiento usado intencionalmente como un método de guerra o debido a otras violaciones del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado;*

*d) El desplazamiento causado por la violencia generalizada o por violaciones de derechos humanos;*

*e) El desplazamiento como resultado de prácticas nocivas;*

*f) Evacuaciones forzadas en casos de desastres naturales o producidos por el ser humano u por otras causas si las evacuaciones no son necesarias por razones de seguridad y salud de aquellos afectados;*

*g) El desplazamiento usado como un castigo colectivo*

*h) El desplazamiento causado por todo acto, evento, factor, o fenómeno de gravedad comparable a todo lo anterior y que no esté justificado en virtud del derecho*

---

<sup>231</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*.2014. p. 664. Traduit par nous

<sup>232</sup>Ibidem. Point 38.

*internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”<sup>233</sup>.*

El artículo 10 habla sobre el desplazamiento inducido por la realización de proyectos y esto es una innovación de este instrumento. Se busca con él, dar respuesta a los desplazamientos que se pueden dar como consecuencia de proyectos de gran magnitud realizados por el hombre y se obliga a los Estados a tener en cuenta los intereses de la población y a informales de todos los proyectos que los pueden afectar<sup>234</sup>. Los Estados también deben hacer una evaluación del impacto socioeconómico y ambiental que puede generar este tipo de proyectos<sup>235</sup>.

La Convención prevé el establecimiento de dos instrumentos para verificar que los Estados cumplen con las obligaciones de la misma: La Conferencia de Estados parte y el informe de las medidas que han sido adoptadas para encontrarse acorde a la Convención<sup>236</sup>. La Conferencia de Estados parte es el foro en el que se reúnen los Estados a analizar las medidas que han sido tomadas para cumplir con los objetivos de la Convención, y discuten sobre la cooperación y la ayuda mutua que se debe dar frente a situaciones de desplazamiento forzado<sup>237</sup>. Los Estados también pueden optar por los mecanismos de seguimiento creados por la Unión Africana, como son: el mecanismo africano de evaluación por los pares o los mecanismos establecidos por la Carta africana de Derechos Humanos<sup>238</sup>. Al 17 de junio de 2016, 25 Estados africanos habían

---

<sup>233</sup>Parágrafo 4. Artículo 4. Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África. 2009.

<sup>234</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*.2014. p. 658. Traduit par nous

<sup>235</sup>Parágrafo 3. Artículo 10. Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África. 2009.

<sup>236</sup>Ibidem.

<sup>237</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*.2014. p. 666. Traduit par nous

<sup>238</sup> Parágrafo 4. Artículo 14. Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África. 2009.

ratificado la Convención de Kampala<sup>239</sup>, sin embargo, la ratificación por todos los Estados africanos sigue siendo un reto<sup>240</sup>.

---

<sup>239</sup>M. DIOP. « Crise des réfugiés : Ce que l’Afrique peut nous apprendre ». Jeune afrique. 17 juin 2016. Disponible dans : <http://www.jeuneafrique.com/334070/politique/crise-refugies-lafrique-apprendre/> Consulté le 21 août 2016.

<sup>240</sup>M. DUCHATELLIER et C. PHUONG. “The African Contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary on the 2009 Kampala Convention”. *Research handbook on International law and migration*.2014. p. 666. Traduit par nous

## CAPÍTULO II

### LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

Colombia es uno de los países con mayor número de personas desplazadas internamente en todo el mundo. Lo anterior se ha dado como consecuencia de un conflicto armado de más de 50 años que ha enfrentado diversos actores armados. Esta especificidad del país ha hecho que Colombia haya desarrollado un marco normativo importante para tratar el problema del desplazamiento, particularmente con las leyes 387 de 1997 sobre desplazamiento (Sección I), que es anterior a la publicación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre desplazamiento interno, y con la más reciente ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras (Sección II).

#### **SECCIÓN I.**

##### **La ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado**

La ley 387 del 18 de julio de 1997 *“por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”*, nos da una definición de desplazado, en su artículo primero al establecer que es:

*“Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:*

*Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional*



*humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público”<sup>241</sup>.*

Se busca con ésta ley garantizar los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos (Parágrafo I) y para ello crea un Sistema de Atención a la Población Desplazada (Parágrafo II).

### **§ 1. Los derechos fundamentales garantizados por la ley**

La ley dice que las personas desplazadas tienen derecho a recibir ayuda y asistencia de parte de la comunidad internacional, y que tienen todos los derechos civiles reconocidos por las normas internacionales sobre derechos humanos, que tienen derecho a no ser discriminadas y que tienen derecho a encontrar soluciones definitivas a su situación<sup>242</sup>. El artículo 3 establece que el Estado colombiano es el primer responsable de prevenir el desplazamiento y proporcionar atención a los desplazados. Podemos resaltar que ésta ley, siendo anterior a los principios rectores sobre los desplazamientos internos, es acorde a ellos en los casos de desplazamiento por conflictos armados, pero no se hace ninguna mención de los desplazados ambientales.

Los desplazados internos tienen derecho a recibir atención humanitaria de emergencia para garantizar sus necesidades básicas en materia de alimentación, aseo personal, atención médica y psicológica y tienen derecho a un alojamiento transitorio en condiciones dignas<sup>243</sup>. También tienen derecho a recibir ayuda de parte de organismos internacionales<sup>244</sup>. La ley establecía que la ayuda de emergencia se daba por tres meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres más. Sin embargo, la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-278 de 2007, declaró inexecutable la expresión “excepcionalmente” y consideró que la ayuda debe ser proporcionada hasta que la persona pueda hacerse cargo de sus necesidades por sus propios medios. La ley

---

<sup>241</sup>Traduit par M. DALTIO. Dans *Le juge constitutionnel vis-à-vis du déplacement forcé*. 12 juillet 2010. p. 15.

<sup>242</sup> Artículo 2. Ley 387 de 1997.

<sup>243</sup> Artículo 15. Ley 387 de 1997.

<sup>244</sup>Ibidem.

crea también un fondo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia, para financiar los programas de prevención y atención de éstas personas<sup>245</sup>.

La ley dice también que el gobierno nacional debe garantizar el retorno o el reasentamiento en otro lugar, si las personas desplazadas así lo quieren<sup>246</sup>. También dice que la condición de desplazado cesará cuando la persona logre una estabilidad socioeconómica en su lugar de origen o en otro lugar<sup>247</sup>.

## **§ 2. *La creación de un Sistema de Atención a la Población Desplazada***

La ley 387 de 1997 creó un Sistema Nacional Integral de Atención a la Población Desplazada, que tiene como objetivos: la atención a la población desplazada por la violencia y el fortalecimiento del desarrollo integral en las zonas más violentas donde se encuentra el mayor número de personas desplazadas, así como la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario<sup>248</sup>. Dicho sistema está compuesto por el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas y proyectos tendientes a la atención de la población desplazada<sup>249</sup>. La ley creó también comités regionales y departamentales para la atención integral a la población desplazada por la violencia<sup>250</sup>.

Hay que señalar que la ley 387 de 1997 fue posteriormente reglamentada por el decreto 2569 de 2000, con el que se creó el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), con el fin que el gobierno pueda tener un registro de las personas que se declararon desplazadas, frente a las instituciones del Estado<sup>251</sup>. Dicho registro es confidencial. Las personas deben declarar su condición de desplazado dentro del año siguiente a la circunstancia que dio lugar a ese desplazamiento y deben hacer una descripción de los

---

<sup>245</sup>Artículos 21 y 22. Ley 387 de 1997.

<sup>246</sup>Artículos 16 y 17. Ley 387 de 1997.

<sup>247</sup>Artículo 18. Ley 387 de 1997.

<sup>248</sup>Artículo 4. Ley 387 de 1997.

<sup>249</sup>Artículo 5. Ley 387 de 1997.

<sup>250</sup>Artículo 7. Ley 387 de 1997.

<sup>251</sup>Artículo 4. Decreto 2569 de 2000.

hechos, el lugar, la profesión o actividad económica a la que se dedicaba antes del desplazamiento y los recursos patrimoniales que tenía antes del desplazamiento<sup>252</sup>.

## **SECCIÓN II: La ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras**

La ley 1448 de 2011 fue elaborada por iniciativa del gobierno en el marco de la justicia transicional y entró en vigor en enero del 2011, ésta ley tiene 208 artículos. Dicha ley desarrolló el derecho a la restitución de tierras y de bienes de acuerdo con los establecido por los Principios Pinheiro<sup>253</sup>, de los cuales no se hace una mención explícita en la ley. El objetivo de ésta ley es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que beneficien a las víctimas del conflicto armado del país. En el marco de la justicia transicional, las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, así como a garantías de no repetición<sup>254</sup>. Las víctimas son definidas en el artículo 3 de la ley como: *“aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hecho ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.”*

### **§ 1. La continuidad en la atención de la población desplazada**

En su título 3, capítulo dos, la ley habla de medidas de asistencia y atención a las víctimas. La ley define la asistencia como: *“el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política”*<sup>255</sup>. La asistencia es entonces, la acción del Estado encaminada a

---

<sup>252</sup>Artículos 6 y 8. Decreto 2569 de 2000.

<sup>253</sup>Sentencia C-330 de 2016. Corte Constitucional Colombiana. Point 63.4. p. 49

<sup>254</sup>Sentencia C-330 de 2016. Corte Constitucional Colombiana. Point 63.4. p. 49 Point 63.4. p. 49

<sup>255</sup> Artículo 49. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

otorgar información y acompañamiento jurídico a las víctimas para que las mismas puedan ejercer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación<sup>256</sup>. Así mismo, la ley toma en cuenta los principios de buena fe, igualdad y no discriminación<sup>257</sup>.

La ley 1448 de 2011 crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a víctimas (SNARIV) que está compuesto por el conjunto de organismos públicos gubernamentales, tanto a nivel central como regional, y de todas las demás entidades encargadas de formular o ejecutar los planes, programas y proyectos para la atención y reparación integral de las víctimas<sup>258</sup>. Este sistema reemplaza el Sistema Nacional de Atención Integral para la Población Desplazada de la ley 387 de 1997. La ley también toma en cuenta la especial vulnerabilidad de ciertos grupos de personas como las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas mayores, las personas en situación de discapacidad, los campesinos, los líderes sociales, los miembros de organizaciones sindicales, los defensores de derechos humanos y las víctimas de desplazamiento forzado<sup>259</sup>. La ley crea también la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas que estará a cargo de llevar el Registro Único de Víctimas, dicho registro tendrá en cuenta la información registrada en el Registro Único de Población Desplazada y lo reemplazará<sup>260</sup>.

## ***§ 2. Un lugar adquirido para las personas desplazadas, en un instrumento muy amplio***

Las personas desplazadas se encuentran incluidas dentro de la definición de víctimas que trae la ley<sup>261</sup>. Sin embargo, el capítulo tercero del título tercero de la ley habla específicamente del fenómeno del desplazamiento forzado y nos dice que las políticas

---

<sup>256</sup>Ibidem.

<sup>257</sup>Cartilla Ley de víctimas y restitución de tierras por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. p. 9

<sup>258</sup>Artículo 159. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>259</sup>Artículo 13. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>260</sup>Artículo 154. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>261</sup>J.M. VENGOECHEA BARRIOS. « Reparations as preemptive State Defense, possible gaps, risks and challenges faced by migrants ». The Law on International Litigation. Legal tools and strategy for international dispute resolution in the 21st century. 2015. p. 353

para la atención de éstas personas deben ser complementadas con lo establecido en la ley 387 de 1997<sup>262</sup>. La ley 1448 de 2011 define a las personas desplazadas como: *“toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las vulneraciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente ley”*<sup>263</sup>.

Las víctimas de desplazamiento forzado ocurrido después del primero de enero de 1985, deben hacer una declaración frente a las instituciones del Ministerio Público dentro de los dos años que siguen a la situación que dio lugar al desplazamiento o dentro de los dos años que siguen a la promulgación de ésta ley, con la condición que no se encuentren registradas en el Registro Único de Población Desplazada. Si las víctimas no pudieron hacer la declaración por razones de fuerza mayor, deben informar a las autoridades sobre su situación<sup>264</sup>. Las personas desplazadas tienen derecho a ayuda humanitaria de emergencia si las autoridades consideran que es necesario<sup>265</sup>. El artículo 67 de la ley 1448 nos dice que la condición de vulnerabilidad de las personas desplazadas cesará cuando esas personas por sus propios medios, o por medios otorgados por el gobierno, logren el goce efectivo de sus derechos.

El artículo 72 de la ley señala que el Estado colombiano deberá adoptar todas las medidas necesarias para la restitución jurídica de tierras a los desplazados, si lo anterior no es posible, las personas tienen derecho a recibir una compensación. Sin embargo, las personas que han sido privadas arbitrariamente de sus viviendas o lugares de residencia, sólo tendrán derecho a la restitución si los hechos que dieron lugar al desplazamiento ocurrieron después del primero de enero de 1991<sup>266</sup>. Las víctimas de eventos ocurridos entre el primero de enero de 1985 y el primero de enero de 1991 solamente tendrán derecho a una indemnización y a garantías de no repetición. Los principios que rigen la

---

<sup>262</sup>Artículo 60. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>263</sup>Ibidem. Paragraphe 2.

<sup>264</sup>Artículo 61. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>265</sup>Artículo 64. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>266</sup>Artículo 75. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

restitución son los principios de preferencia; es decir, que la restitución de tierras constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas, la independencia, la progresividad, la estabilización, la seguridad jurídica, la prevención, la participación y la prevalencia constitucional<sup>267</sup>. La ley crea también en su artículo 76 un registro de tierras presuntamente despojadas y abandonadas forzosamente como instrumento para la restitución de tierras.

Del mismo modo, las víctimas que han sido privadas de sus viviendas tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda o a la adquisición de una nueva casa<sup>268</sup>. Las víctimas tendrán también derecho a programas de rehabilitación en los que recibirán atención psicológica, social y jurídica para el restablecimiento de sus derechos<sup>269</sup>.

Aunque la legislación se esfuerza por dar respuestas a las personas desplazadas internamente, en la práctica se plantean muchas dificultades al momento de su implementación. De hecho, la Corte Constitucional colombiana en sentencia T-025 de 2005 consideró que la situación en Colombia constituía un “Estado de cosas inconstitucional”<sup>270</sup> y exhortó a las autoridades para que proporcionen verdaderas soluciones duraderas para las personas desplazadas. Esperamos que en los próximos años, se pueda dar una respuesta realmente efectiva a estas personas, una vez que el conflicto que vive el país llegue a su fin.

---

<sup>267</sup> Artículo 73. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>268</sup> Artículo 123. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>269</sup> Artículo 135. Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.

<sup>270</sup> El Estado de cosas inconstitucional hace referencia a violaciones repetidas de los derechos humanos. (M. DALTIO. *Le juge constitutionnel vis-à-vis du déplacement forcé*. 12 juillet 2010. p. 38)

## **CONCLUSIÓN GENERAL**

El derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos se deben adaptar a un mundo en constante cambio, que ha visto a millones de personas abandonar sus hogares en la búsqueda de soluciones, ya sea en otro país o en otra región del país del cual son nacionales.

A lo largo de éste trabajo nos hemos interesado por el problema de las personas desplazadas en su país y su estatuto a nivel internacional, siendo su número de gran tamaño a nivel mundial. Éste derecho es un derecho en desarrollo ya que, si bien éstas personas no competen sino al país en el cual se encuentran, cada vez más se les otorga una protección internacional por medio de principios que, a pesar de no ser vinculantes a nivel internacional, han aportado respuestas a la situación de éstas personas y se han convertido en una importante referencia en este tema.

Es importante señalar que las organizaciones internacionales son hoy en día, junto con los Estados, importantes sujetos de derecho internacional. Ellas han jugado un rol mayor en el desarrollo del problema del desplazamiento interno y han ampliado sus mandatos para enfrentar las dificultades que suponen tanto la protección como la asistencia de las personas en esta situación. Ha sido en el seno de instituciones internacionales que han sido concebidos instrumentos normativos a nivel internacional que tratan sobre esta materia.

Sin embargo, ha habido intentos tanto a nivel regional, con la adopción de la Convención de Kampala, como a nivel nacional sobre este tema. La Convención de Kampala constituye, en efecto, una verdadera innovación al ser el único instrumento vinculante, a nivel regional, sobre desplazamiento interno. Pero falta ver la efectividad de este instrumento en la práctica y si otras regiones van a seguir el ejemplo de la Unión Africana.

En cuanto a las especificidades de Colombia, segundo país con el mayor número de personas desplazadas internamente, leyes como la ley 387 de 1997 sobre desplazamiento y la ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras fueron elaboradas con el fin de dar respuestas a este fenómeno, pero esas respuestas hasta ahora no han sido muy efectivas.



En el momento en que terminamos este trabajo, el gobierno de Colombia se encuentra cerca de la firma de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que busca también dar soluciones a las personas en situación de desplazamiento y que se disminuya el número de personas en esta situación por medio de la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos. De hecho. El acuerdo “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” establece que el gobierno y las FARC se comprometen a garantizar la restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado y que puedan gozar efectivamente de sus tierras, se garantiza también el retorno voluntario de las personas a los lugares de los cuales se vieron obligados a desplazarse<sup>271</sup>.

En los días que siguen la terminación de este trabajo de grado, una nueva cumbre sobre migraciones va a tener lugar en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York y se va a adoptar una resolución al respecto<sup>272</sup>. Queda entonces saber si los Principios Directores sobre desplazamiento interno van a adquirir la fuerza para convertirse en costumbre internacional o si un instrumento vinculante sobre desplazamiento va a ser adoptado. Acaso, ¿la Declaración de Nueva York se va a convertir en la Convención de Nueva York sobre migraciones forzadas, siguiendo el ejemplo de la Convención sobre Desapariciones Forzadas?

---

<sup>271</sup> Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Parágrafo 1.1.7. 24 de agosto de 2016.

<sup>272</sup>HCR . « Le sommet des Nations Unies pourrait « changer la donne » pour la protection des réfugiés et des migrants ». 6 septembre 2016. Disponible dans : <http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/9/57d114ada/sommet-nations-unies-pourrait-nbspchanger-donne-protection-refugies-migrants.html> Consulté le 17 septembre 2016.

## **ANEXOS**

# Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays

## INTRODUCTION : PORTEE ET OBJET

1. Les présents Principes directeurs visent à répondre aux besoins particuliers des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays à travers le monde. Y sont identifiés les droits et les garanties concernant la protection des personnes contre les déplacements forcés et la protection et l'aide qu'il convient de leur apporter au cours du processus de déplacement, ainsi que pendant leur retour ou leur réinstallation et leur réintégration.

2. Aux fins des présents Principes directeurs, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou pour en éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un Etat.

3. Les présents Principes s'inspirent du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire et y sont conformes. Ils visent à guider :

a) le Représentant du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans l'exercice de son mandat;

b) les Etats qui ont à faire face au phénomène des déplacements internes;

c) tous les autres groupes, individus et autorités concernés dans leurs relations avec les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; et

d) les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans les activités qu'elles consacrent au problème du déplacement interne.

4. Les présents Principes directeurs doivent être diffusés et appliqués sur une échelle aussi vaste que possible.

## **TITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX**

### **Principe 1**

1. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d'égalité, en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne font l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

2. Les présents Principes ne préjugent en rien de la responsabilité pénale des personnes en vertu du droit international, notamment en cas de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre.

### **Principe 2**

1. Indépendamment de leur statut juridique, tous les groupes, autorités et personnes observent les présents Principes directs et les appliquent sans discrimination. L'observation des présents Principes n'a aucune incidence juridique sur le statut des autorités, des groupes ou des personnes concernées.

2. Les présents Principes ne seront pas interprétés comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d'un des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou les droits accordés aux personnes en vertu de la législation interne. En particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit de demander l'asile et d'en bénéficier dans d'autres pays.

### **Principe 3**

1. C'est aux autorités nationales qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction.

2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire desdites autorités. Elles ne seront soumises à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande.

#### **Principe 4**

1. Les présents Principes sont appliqués sans discrimination aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale, ethnique ou sociale, le statut juridique ou social, l'âge, l'incapacité, la propriété, la naissance ou tout autre critère similaire.
2. Certaines personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, telles que les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les mères d'enfants en bas âge, les femmes chef de famille, les personnes souffrant d'incapacités et les personnes âgées ont droit à la protection et à l'aide que nécessite leur condition et à un traitement qui tienne compte de leurs besoins particuliers.

### **TITRE II - PRINCIPES RELATIFS A LA PROTECTION CONTRE LE DEPLACEMENT**

#### **Principe 5**

Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l'homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes.

#### **Principe 6**

1. Chaque être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel.
2. L'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements :
  - a) qui sont la conséquence de politiques d'apartheid, de politiques de "nettoyage ethnique", ou de pratiques similaires dont l'objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée;
  - b) qui interviennent dans des situations de conflit armé, à moins que la sécurité des personnes

civiles concernées ou des raisons militaires impérieuses ne les aient rendus nécessaires;

c) qui se produisent dans le contexte de projets de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées à l'intérêt supérieur du public;

d) qui sont opérés, en cas de catastrophe, à moins que la sécurité et la santé des personnes concernées n'exigent leur évacuation; et

e) qui sont utilisés comme un moyen de châtement collectif.

3. Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que ne l'exigent les circonstances.

### **Principe 7**

1. Avant toute décision tendant à déplacer des personnes, les autorités concernées font en sorte que toutes les autres possibilités soient étudiées afin d'éviter le recours à une telle mesure.

Lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, tout doit être fait pour que le nombre des personnes déplacées soit aussi restreint que possible et que les effets néfastes de l'opération soient limités.

2. Les autorités qui procèdent à un tel déplacement de population veillent, dans toute la mesure possible, à ce que les personnes déplacées soient convenablement logées, que le processus de déplacement se fasse dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, de l'alimentation, de la santé et de l'hygiène et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés.

3. Lorsque le déplacement a lieu dans d'autres circonstances que la phase d'urgence d'un conflit armé ou d'une catastrophe, les garanties suivantes doivent être observées

- a) Toute décision sera prise par l'autorité étatique habilitée par la loi;
- b) Les dispositions nécessaires seront prises pour que les personnes déplacées soient pleinement informées des raisons et des modalités de leur déplacement et, le cas échéant, des mesures d'indemnisation et de réinstallation;
- c) On s'efforcera d'obtenir le consentement libre et en connaissance de cause des personnes déplacées;
- d) Les autorités compétentes s'efforceront d'associer les personnes concernées, en particulier les femmes, à la planification et à la gestion de leur réinstallation;
- e) Des mesures de maintien de l'ordre seront, au besoin, prises par les autorités judiciaires compétentes; et
- f) Le droit à un recours utile, y compris à un réexamen des décisions prises par les autorités judiciaires compétentes, sera respecté.

### **Principe 8**

Il ne sera procédé à aucun déplacement de population en violation des droits à la vie, à la dignité, à la liberté et à la sécurité des personnes concernées.

### **Principe 9**

Les Etats ont l'obligation particulière de protéger contre le déplacement les populations indigènes, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particuliers.

## **TITRE III - PRINCIPES RELATIFS A LA PROTECTION AU COURS DU DEPLACEMENT**

### **Principe 10**

1. Chaque être humain a un droit inhérent à la vie qui est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées en particulier contre :

- a) le génocide;
- b) l'assassinat;
- c) les exécutions sommaires ou arbitraires; et) les disparitions forcées, y compris l'enlèvement ou la détention non reconnue, quand il y a menace de mort ou mort d'homme.

La menace du recours ou l'incitation à un des actes susmentionnés sont interdites.

2. Les attaques ou d'autres actes de violence contre des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ne participent plus aux hostilités sont interdits en toutes circonstances. Les personnes déplacées sont protégées, en particulier contre :

- a) les attaques directes ou aveugles ou d'autres actes de violence, y compris la délimitation de zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées;
- b) l'utilisation de la faim comme méthode de combat;
- c) l'utilisation des personnes déplacées comme bouclier pour protéger des objectifs militaires contre des attaques ou pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires;
- d) les attaques visant les camps ou les zones d'installation des personnes déplacées; et
- e) l'utilisation de mines terrestres antipersonnel.

### **Principe 11**

1. Chacun a droit à la dignité et à l'intégrité physique, mentale et morale.

2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, que leur liberté ait fait l'objet de restrictions ou non, seront protégées en particulier contre :

- a) le viol, la mutilation, la torture, les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et d'autres atteintes à leur dignité tels que les actes de violence visant spécifiquement les femmes, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur;



b) l'esclavage ou toute forme contemporaine d'esclavage (vente à des fins de mariage, exploitation sexuelle, travail forcé des enfants, etc.); et

c) les actes de violence visant à semer la terreur parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

La menace du recours ou l'incitation à un des actes susmentionnés sont interdites.

### **Principe 12**

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Pour donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays,

il est interdit de les enfermer ou de les confiner dans un camp. Si dans des circonstances exceptionnelles de telles mesures s'avèrent absolument nécessaires, elles ne doivent pas durer plus longtemps que ne l'exigent ces circonstances.

3. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées contre toute arrestation et détention discriminatoire du fait de leur déplacement.

4. En aucun cas, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ne seront prises comme otages.

### **Principe 13**

1. En aucune circonstance les enfants déplacés ne seront enrôlés dans une force armée ou obligés ou autorisés à participer à des combats.

2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées contre les pratiques discriminatoires consistant à tirer parti de leur situation pour les enrôler dans des forces ou des groupes armés. En particulier, toute pratique cruelle, inhumaine ou dégradante visant à contraindre une personne déplacée à accepter d'être enrôlée dans un groupe armé ou à la punir en cas de refus est interdite quelles que soient les circonstances.

### **Principe 14**

1. Chaque personne déplacée à l'intérieur de son propre pays a le droit de circuler librement et de choisir librement son lieu de résidence.
2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont, en particulier, le droit d'entrer et de sortir librement des camps ou d'autres zones d'installation.

### **Principe 15**

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont :

- a) le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays;
- b) le droit de quitter leur pays;
- c) le droit de demander l'asile dans un autre pays; et
- d) le droit d'être protégées contre le retour ou la réinstallation forcés dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur santé seraient en danger.

### **Principe 16**

1. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont le droit d'être informées du sort de leurs proches portés disparus et du lieu où ils se trouvent.
2. Les autorités concernées s'efforceront de déterminer le sort et le lieu où se trouvent les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays portées disparues et coopèrent avec les organisations internationales qui se consacrent à cette tâche. Elles tiennent les proches au courant des progrès de leurs recherches et les informent de tout élément nouveau.
3. Les autorités concernées s'efforcent de récupérer et d'identifier les restes des personnes décédées, d'empêcher leur profanation ou mutilation, de faciliter leur restitution aux proches ou d'en disposer d'une manière respectueuse.
4. Les sépultures des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont protégées en toutes circonstances. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont le droit

d'accéder aux sépultures de leurs proches décédés.

### **Principe 17**

1. Chacun a droit au respect de sa vie familiale.
2. Afin de donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les membres d'une famille qui souhaitent rester ensemble seront autorisés à le faire.
3. Les familles séparées par suite de leur déplacement doivent être réunifiées aussi rapidement que possible. Toutes les mesures requises seront prises pour accélérer la réunification de ces familles, notamment lorsqu'il y a des enfants. Les autorités responsables faciliteront les recherches faites par les membres d'une famille, encourageront l'action des organisations humanitaires qui oeuvrent pour la réunification des familles et coopéreront avec elles.
4. Les membres des familles déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont on a restreint la liberté en les enfermant ou en les confinant dans des camps ont le droit de rester ensemble.

### **Principe 18**

1. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie suffisant.
2. Au minimum quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assurent aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays les services suivants et leur permettent d'y accéder en toute sécurité :
  - a) aliments de base et eau potable;
  - b) abri et logement;

c) vêtements décents; et

d) services médicaux et installations sanitaires essentiels.

3. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des femmes à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité.

### **Principe 19**

1. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont blessées ou malades, ainsi que celles qui sont handicapées, recevront, dans toute la mesure possible et dans les meilleurs délais, les soins médicaux et l'attention dont elles ont besoin sans distinction aucune fondée sur des motifs extramédicaux. Au besoin, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays auront accès à des services d'assistance psychologique et sociale.

2. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des femmes dans le domaine de la santé, notamment à leur accès aux prestataires et aux services de soins de santé, tels que les soins de santé en matière de reproduction, ainsi qu'aux services de consultation requis dans le cas des victimes de sévices sexuels et autres.

3. Une attention particulière doit être accordée en outre à la prévention des maladies contagieuses et infectieuses, y compris le SIDA, parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

### **Principe 20**

1. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

2. Pour donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les autorités concernées leur délivreront les documents dont elles ont besoin (passeport, papiers d'identité, attestation de naissance, attestation de mariage, etc.) pour qu'elles puissent jouir de leurs droits. Elles leur faciliteront en particulier l'obtention de nouveaux documents ou le remplacement des documents perdus durant le processus de déplacement sans leur imposer des conditions excessives, telles que le retour dans le lieu de résidence habituel pour se faire délivrer ces documents ou d'autres papiers nécessaires.

3. Les femmes et les hommes pourront demander de tels documents sur un pied d'égalité et

auront le droit de se les faire délivrer à leur propre nom.

### **Principe 21**

1. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété et de ses possessions.
2. La propriété et les possessions des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront en toutes circonstances protégées, en particulier contre les actes suivant a) pillage;
  - b) attaques directes ou aveugles ou d'autres actes de violence;
  - c) l'utilisation en guise de bouclier pour des opérations ou des objectifs militaires;
  - d) l'utilisation comme objets de représailles; et
  - e) la destruction ou l'appropriation en tant que mesure de châtement collectif.
3. La propriété et les possessions laissées par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays au moment de leur départ doivent être protégées contre la destruction, ainsi que l'appropriation, l'occupation ou l'utilisation arbitraires et illégales.

### **Principe 22**

1. L'exercice des droits suivants par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qu'elles vivent dans des camps ou ailleurs, ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées :
  - a) droits à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, d'opinion et d'expression;
  - b) droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activités économiques;
  - c) droit à la liberté d'association et de participation sur un pied d'égalité aux affaires de la communauté;
  - d) droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le droit d'accéder aux moyens nécessaires pour exercer ce droit; et

e) droit de communiquer dans une langue qu'elles comprennent.

### **Principe 23**

1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Pour donner effet à ce droit, les autorités concernées veilleront à ce que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en particulier les enfants déplacés, reçoivent gratuitement un enseignement qui revêtira un caractère obligatoire au niveau primaire. Cet enseignement respectera leur identité culturelle, leur langue et leur religion.
3. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine et égale participation des femmes et des filles dans le cadre des programmes d'enseignement.
4. Des services d'enseignement et de formation seront offerts, dès que les conditions le permettront, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en particulier aux adolescents et aux femmes, qu'ils vivent dans un camp ou ailleurs.

## **TITRE IV - PRINCIPES RELATIFS A L'AIDE HUMANITAIRE**

### **Principe 24**

1. Toute aide humanitaire sera fournie dans le respect des principes d'humanité et d'impartialité et à l'abri de toute discrimination.
2. L'aide humanitaire aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ne sera pas détournée, notamment pour des raisons politiques ou militaires.

### **Principe 25**

1. C'est en premier lieu aux autorités nationales qu'incombent le devoir et la responsabilité d'apporter une aide humanitaire aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
2. Les organisations humanitaires internationales et d'autres parties concernées ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme inamicale ou comme un acte

d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et sera accueillie de bonne foi. Ces services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire.

3. Toutes les autorités concernées autoriseront et faciliteront le libre passage de l'aide humanitaire et permettront aux personnes chargées de la distribuer d'accéder rapidement et librement aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

### **Principe 26**

Les personnes chargées de l'aide humanitaire, leurs moyens de transport et leurs stocks seront protégés. Ils ne feront l'objet d'aucune attaque ou autre acte de violence.

### **Principe 27**

1. Les organisations internationales humanitaires et les autres parties concernées accorderont, dans le cadre de l'aide qu'ils apportent, l'attention voulue au besoin de protection et aux droits fondamentaux des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et prendront les mesures nécessaires à cet effet. Ce faisant, ces organisations et parties respecteront les normes et les codes de conduite internationaux.

2. Le précédent paragraphe ne préjuge en rien des responsabilités en matière de protection des organisations internationales mandatées dont les services peuvent être offerts ou demandés par les Etats.

## **TITRE V - PRINCIPES RELATIFS AU RETOUR, A LA REINSTALLATION ET A LA REINTEGRATION**

### **Principe 28**

1. C'est aux autorités compétentes qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s'efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d'origine ou qui ont été réinstallées.

2. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays à la planification et à la gestion de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.

### **Principe 29**

1. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou se sont réinstallées dans d'autres régions du pays ne feront l'objet d'aucune discrimination en raison de leur déplacement. Elles ont le droit de participer pleinement et sur un pied d'égalité aux affaires publiques à tous les niveaux et d'accéder dans des conditions d'égalité aux services publics.

2. Les autorités compétentes ont le devoir et la responsabilité d'aider les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu d'origine ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et les possessions qu'elles avaient laissées ou dont elles avaient été dépossédées au moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n'est pas possible, les autorités compétentes accorderont à ces personnes une indemnisation équitable ou une autre forme de dédommagement ou les aideront à les obtenir.

### **Principe 30**

Toutes les autorités concernées autoriseront et aideront les organisations humanitaires internationales et les autres parties concernées à accéder librement et rapidement, dans l'exercice de leurs mandats respectifs, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays pour les aider dans le cadre de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.



# PRINCIPES CONCERNANT LA RESTITUTION DES LOGEMENTS ET DES BIENS DANS LES CAS DES RÉFUGIÉS ET DES PERSONNES DÉPLACÉES

## Préambule

**Reconnaissant** que des millions de réfugiés et de personnes déplacées à travers le monde

continuent de vivre dans une situation précaire et incertaine et que tous les réfugiés et les personnes

déplacées ont le droit de regagner de leur plein gré, dans la sécurité et la dignité, leurs foyers et leurs

terres d'origine ou ceux qu'ils occupaient habituellement,

**Soulignant** que le retour de plein gré dans la sécurité et la dignité doit être fondé sur un choix personnel effectué librement et en toute connaissance de cause et que les réfugiés et les personnes

déplacées devraient disposer d'informations complètes, objectives, à jour et exactes, portant

notamment sur les questions de sécurité physique, matérielle et juridique dans leur pays ou leur lieu

d'origine,

**Réaffirmant** les droits des femmes et des filles réfugiées ou déplacées et reconnaissant la nécessité

de prendre des mesures pour garantir leurs droits à la restitution des logements, des terres et des

biens,

**Se félicitant** de la création, au cours des dernières années, de nombreuses institutions nationales

et internationales chargées de garantir les droits à restitution des réfugiés et des personnes déplacées,

ainsi que de l'existence des nombreux textes législatifs, normes, déclarations de principe, accords et

directives nationaux et internationaux qui reconnaissent et réaffirment le droit à la restitution des

logements, des terres et des biens,

**Convaincu(e)** que le droit à la restitution des logements, des terres et des biens est essentiel pour

le règlement des conflits et la consolidation de la paix après un conflit, le retour dans la sécurité et

dans des conditions viables et l'instauration de l'état de droit, et qu'un suivi attentif des programmes

de restitution de la part des organisations internationales et des États concernés est indispensable

pour garantir la bonne exécution de ces programmes,

**Convaincu(e)** également que la mise en œuvre de programmes efficaces de restitution des

logements, des terres et des biens, qui constitue un élément clef de la justice réparatrice, contribue

effectivement à désamorcer des situations qui risqueraient d'engendrer des déplacements et à

instaurer une paix durable,

## **Section I. Portée et champ d'application**

### **1. Portée et champ d'application**

#### 1.1

Les présents Principes concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des

réfugiés et des personnes déplacées visent à aider tous les acteurs nationaux et internationaux

à résoudre les questions d'ordre juridique et technique que soulève la restitution dans les

situations où le déplacement a eu pour résultat de priver arbitrairement ou illégalement des

personnes de leur logement, de leurs terres et de leurs biens ou de leur lieu de résidence

habituelle.

## 1.2

Les Principes concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et

des personnes déplacées s'appliquent au même titre à tous les réfugiés, personnes déplacées

à l'intérieur de leur pays et autres personnes déplacées ayant franchi les frontières nationales

sans pour autant répondre nécessairement à la définition juridique du réfugié (ci-après

dénommés «réfugiés et personnes déplacées»), qui ont été arbitrairement ou illégalement

privés de leur logement, de leurs biens ou de leurs terres ou de leur lieu de résidence habituelle,

quelles que soient les circonstances qui ont donné initialement naissance au déplacement.

Section II. Le droit à la restitution des logements et des biens

## **2. Le droit à la restitution des logements et des biens**

## 2.1

Tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de se voir restituer tout logement,

terre et/ou bien dont ils ont été privés arbitrairement ou illégalement, ou de recevoir une

compensation pour tout logement, terre et/ou bien qu'il est matériellement impossible de

leur restituer, comme établi par un tribunal indépendant et impartial.

## 2.2

Les États privilégient le droit à la restitution comme moyen de recours en cas de déplacement

et comme élément clef de la justice réparatrice. Le droit à la restitution existe en tant que droit

distinct, sans préjudice du retour effectif ou du non-retour des réfugiés ou des personnes

déplacées ayant droit à la restitution de leur logement, de leurs terres et de leurs biens.

## **Section III. Principes fondamentaux**

### **3. Le droit de ne pas faire l'objet de discrimination**

#### 3.1

Toute personne a le droit d'être protégée contre la discrimination fondée sur la race, la couleur,

le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la pauvreté, l'incapacité, la naissance ou toute autre situation.

### 3.2

Les États veillent à ce que la discrimination pour les motifs susmentionnés soit interdite en

droit et en fait et à ce que toutes les personnes, y compris les réfugiés et les personnes

déplacées, soient égales devant la loi.

## **4. Le droit à l'égalité entre hommes et femmes**

4.1 Les États garantissent aux hommes et aux femmes, ainsi qu'aux garçons et aux filles, un

droit égal à la restitution des logements, des terres et des biens. Les États garantissent

aux hommes et aux femmes, ainsi qu'aux garçons et aux filles, des droits égaux en ce qui

concerne, notamment, le retour librement consenti dans la sécurité et la dignité, la sécurité

d'occupation, la propriété des biens, la succession, ainsi que la jouissance et la gestion d'un

logement, d'une terre et de biens, et l'accès à ceux-ci.

#### 4.2

Les États devraient veiller à ce que les programmes, politiques et pratiques en matière de

restitution des logements, des terres et des biens reconnaissent les droits de propriété conjoints

des hommes et des femmes chefs de famille en tant qu'éléments faisant partie intégrante du

processus de restitution, et prennent en compte les impératifs d'égalité entre les sexes.

#### 4.3

Les États veillent à ce que les programmes, politiques et pratiques en matière de restitution des

logements, des terres et des biens ne désavantagent pas les femmes et les filles. Ils devraient

adopter des mesures positives visant à garantir l'égalité entre les sexes à cet égard.

### **5. Le droit d'être protégé contre les déplacements**

#### 5.1

Chacun a le droit d'être protégé contre le déplacement arbitraire de son logement, de sa terre

ou de son lieu de résidence habituelle.

## 5.2

Les États devraient inscrire la protection contre les déplacements dans leur législation

nationale, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et au

droit humanitaire et aux normes connexes, et devraient accorder cette protection à toutes les

personnes placées sous leur juridiction ou leur autorité de fait.

## 5.3

Les États interdisent l'éviction forcée, la démolition de logements et la destruction de zones

agricoles et la confiscation ou l'expropriation arbitraires de terres comme sanction ou comme

instrument ou méthode de guerre.

## 5.4

Les États prennent des mesures pour veiller à ce que nul ne soit soumis à des déplacements,

que ce soit par des acteurs étatiques ou non étatiques. Les États veillent également à ce que

les individus, sociétés et autres entités placés sous leur juridiction ou leur autorité de fait



s'abstiennent de procéder ou de participer au déplacement de personnes.

## **6. Le droit à la vie privée et au respect du domicile**

### 6.1

Chacun a le droit d'être protégé contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée et son domicile.

### 6.2

Les États veillent à ce que chacun bénéficie des garanties offertes par la loi en cas d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée ou son domicile

## **7. Le droit à la jouissance pacifique des biens**

7.1 Chacun a droit à la jouissance pacifique de ses biens.

### 7.2

Les États subordonnent uniquement l'utilisation et la jouissance des biens à l'intérêt public

et aux conditions prévues par la loi et par les principes généraux du droit international. Dans

toute la mesure possible, l'«intérêt de la société» doit être interprété dans un sens restrictif,

de manière à impliquer uniquement une ingérence temporaire ou limitée eu égard au droit

de jouissance pacifique de ses biens.

## **8. Le droit à un logement suffisant**

8.1 Chacun a droit à un logement suffisant.

8.2

Les États devraient adopter des mesures positives en vue d'alléger le sort des réfugiés et des

personnes déplacées qui vivent dans des conditions de logement insuffisantes.

## **9. Le droit de circuler librement**

9.1

Chacun a le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence. Nul ne sera

contraint de manière arbitraire ou illégale de demeurer dans les limites d'un certain territoire,

zone ou région. De même, nul ne sera contraint de manière arbitraire ou illégale de quitter un

certain territoire, zone ou région.

9.2

Les États veillent à ce que le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence ne

fasse l'objet de restrictions que si celles ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la morale publiques , ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, aux réfugiés et au droit humanitaire et les normes connexes.

#### **Section IV. Le droit au retour librement consenti dans la sécurité et la dignité**

##### **10.**

##### **Le droit au retour librement consenti dans la sécurité et la dignité**

##### **10.1**

Tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de regagner de leur plein gré leur foyer, leurs terres ou leur lieu de résidence habituelle, dans la sécurité et la dignité. Le retour de plein gré dans la sécurité et la dignité doit être fondé sur un choix personnel, exprimé librement et en toute connaissance de cause. Les réfugiés et les personnes déplacées devraient disposer d'informations complètes, objectives, à jour et exactes, portant notamment sur les questions

de sécurité physique, matérielle et juridique dans leur pays ou leur lieu d'origine.

## 10.2

Les États autorisent les réfugiés et les personnes déplacées qui souhaitent regagner leur foyer,

leurs terres ou leur lieu de résidence habituelle à le faire. Ce droit n'est pas susceptible de

restrictions en cas de succession d'États ni de prescription arbitraire ou illégale.

## 10.3

Les réfugiés et les personnes déplacées ne peuvent être forcés ou contraints, par des moyens

directs ou détournés, de regagner leur foyer, leurs terres ou leur lieu de résidence habituelle. Les

réfugiés et les personnes déplacées devraient avoir la possibilité de rechercher concrètement

des solutions durables au déplacement autres que le retour, si tel est leur souhait, sans

préjudice de leur droit à la restitution de leur logement, de leurs terres et de leurs biens.

#### 10.4

Les États devraient, si nécessaire, solliciter auprès d'autres États ou d'organisations

internationales l'aide financière et technique requise pour faciliter le retour de plein gré

effectif, dans la sécurité et la dignité, des réfugiés et des personnes déplacées.

### **Section V. Dispositif juridique, politiques, procédures, institutions et mécanismes demise en œuvre**

#### **11.**

**Compatibilité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme,**

**aux réfugiés et au droit humanitaire et les normes connexes**

#### 11.1

Les États devraient veiller à ce que l'ensemble des procédures, institutions, mécanismes et

cadres juridiques relatifs à la restitution des logements, des terres et des biens soient pleinement

conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, aux réfugiés et au droit humanitaire ainsi qu'aux normes connexes et reconnaissent le droit au retour librement

consenti dans la sécurité et la dignité.

## **12. Procédures, institutions et mécanismes nationaux**

### 12.1

Les États devraient mettre en place en temps utile et soutenir des procédures, institutions et

mécanismes équitables, indépendants, transparents et non discriminatoires en vue d'évaluer

les demandes de restitution des logements, des terres et des biens et d'y faire droit. Si les

procédures, institutions et mécanismes existants sont à même de traiter efficacement ces

questions, des ressources – financières, humaines et autres – suffisantes devraient leur être

allouées pour faciliter la restitution de façon équitable et dans des délais raisonnables.

### 12.2

Les États devraient veiller à ce que les procédures, institutions et mécanismes de restitution

des logements, des terres et des biens prennent en compte la situation des mineurs et

des femmes, qu'ils reconnaissent l'égalité des droits des hommes et des femmes ainsi que

des garçons et des filles et qu'ils intègrent le principe primordial de l'«intérêt supérieur de l'enfant».

### 12.3

Les États devraient prendre toutes les mesures administratives, législatives et judiciaires qui s'imposent pour appuyer et faciliter le processus de restitution des logements, des terres et des biens. Ils devraient doter tous les organismes compétents des ressources financières, humaines et autres suffisantes pour mener à bien leur tâche de façon équitable et en temps voulu.

### 12.4

Les États devraient adopter des directives qui garantissent l'efficacité de tous les mécanismes, institutions et procédures compétents en matière de restitution des logements, des terres et des biens, y compris des directives concernant l'organisation institutionnelle, la formation du personnel et le nombre d'affaires, les procédures d'enquête et de traitement des demandes,

la vérification des droits sur les biens ou autres droits de propriété, ainsi que les mécanismes relatifs à la prise de décisions et à leur mise en œuvre et aux moyens de recours. Les États peuvent intégrer les modes alternatifs ou informels de règlement des différends à ce processus, dans la mesure où de tels mécanismes se conforment tous aux règles internationales relatives aux droits de l'homme, aux réfugiés et au droit humanitaire et aux normes connexes, notamment le droit d'être protégé contre la discrimination.

## 12.5

En cas d'effondrement général de l'état de droit, ou lorsque les États ne sont pas à même de mettre en œuvre les procédures, institutions et mécanismes nécessaires pour faciliter le processus de restitution des logements, des terres et des biens de façon équitable et en temps voulu, les États devraient demander l'assistance technique et la coopération des organismes internationaux compétents afin d'instituer des régimes transitoires qui permettraient aux



réfugiés et aux personnes déplacées de disposer de recours utiles en vue de la restitution.

## 12.6

Les États devraient inclure des procédures, institutions et mécanismes de restitution des

logements, des terres et des biens dans les accords de paix et les accords de rapatriement

librement consenti. Les accords de paix devraient comporter des dispositions précises par

lesquelles les parties s'engagent à régler selon des modalités appropriées tous problèmes

concernant les logements, les terres et les biens qui impliquent des moyens de recours en

vertu du droit international ou menacent de compromettre le processus de paix s'ils ne sont

pas résolus, tout en indiquant clairement que le droit à restitution est le moyen de recours

privilegié à cet égard.

## 13.

**Facilité d'accès aux procédures de traitement des demandes de restitution**

### 13.1

Quiconque a été arbitrairement ou illégalement privé de son logement, de ses terres et/ou de

ses biens devrait être habilité à présenter une demande de restitution et/ou d'indemnisation à

un organe indépendant et impartial, qui se prononcera sur la demande et notifiera la décision

à l'intéressé. Les États ne devraient pas subordonner le dépôt d'une demande de restitution à

des conditions préalables.

### 13.2

Les États devraient veiller à ce que le processus de traitement des demandes de restitution sous

tous ses aspects, y compris les procédures de recours, soit équitable, rapide, facile d'accès,

Gratuit et tienne compte de la situation des mineurs et des femmes. Les États devraient

prendre des mesures positives pour que les femmes puissent participer à ce processus dans

des conditions de pleine égalité.

### 13.3

Les États devraient veiller à ce que les mineurs séparés de leurs parents et non accompagnés

puissent participer au processus de demande de restitution et y soient pleinement représentés,

et à ce que toute décision prise en rapport avec la demande de restitution des intéressés soit

en conformité avec le principe primordial de l'«intérêt supérieur de l'enfant».

### 13.4

Les États devraient veiller à ce que les réfugiés et autres personnes déplacées aient accès au

processus de demande de restitution quel que soit le lieu où ils résident pendant la période

de déplacement, y compris dans le pays d'origine, le pays d'asile ou le pays où ils ont trouvé

refuge. Les États devraient veiller à ce que toutes les personnes concernées soient informées

de l'existence du processus de demande de restitution et à ce que les renseignements sur ce

processus soient faciles à obtenir, y compris dans le pays d'origine, le pays d'asile ou le pays

où elles ont trouvé refuge.

### 13.5

Les États devraient s'efforcer de mettre en place des centres et bureaux de traitement

des demandes de restitution dans toutes les régions touchées où résident des requérants

potentiels. Les demandes devraient être présentées en personne mais, afin que le processus

soit accessible au plus grand nombre, elles devraient également pouvoir être soumises par

courrier ou par procuration. Les États devraient aussi envisager de mettre en place des unités

mobiles afin de garantir l'accès à ces services à tous les requérants potentiels.

### 13.6

Les États devraient veiller à ce que les utilisateurs des logements, des terres et/ou des biens,

y compris les locataires, aient le droit de participer au processus de demande de restitution,

notamment en déposant des demandes collectives.

### 13.7

Les États devraient veiller à ce que les formules de demande soient simples et faciles à

comprendre et à utiliser, et rédigées dans la ou les langues principales des groupes concernés.

Il conviendrait de prévoir du personnel compétent chargé d'aider les personnes à remplir et

à soumettre les formules nécessaires, cette aide devant prendre en compte les problèmes

spécifiques des mineurs et des femmes.

### 13.8

S'il n'est pas possible de simplifier suffisamment les formules de demande de restitution

en raison de la complexité de la procédure, les États devraient confier à des personnels

qualifiés le soin de procéder à des entretiens confidentiels avec les requérants potentiels, en

prêtant attention aux besoins spécifiques des mineurs et des femmes, de façon à obtenir les

renseignements nécessaires et à remplir les formules en leur nom.

13.9

Les États devraient fixer des délais précis pour le dépôt des demandes de restitution. Cette

information devrait être largement diffusée et le délai prévu suffisamment long pour que

toutes les personnes concernées puissent raisonnablement déposer une demande, compte

tenu du nombre de requérants potentiels, des difficultés que risquent de soulever la collecte

de l'information et l'accès aux procédures, de l'échelle du déplacement, de la nécessité de

rendre le processus accessible aux groupes susceptibles d'être défavorisés et aux personnes

vulnérables, ainsi que de la situation politique dans le pays ou la région d'origine.

13.10 Les États devraient veiller à ce qu'une assistance spéciale soit accordée aux personnes qui en

ont besoin, comme les analphabètes et les handicapés, afin de ne pas leur fermer l'accès au

processus de demande de restitution.

13.11 Les États devraient veiller à ce qu'une assistance juridique adéquate soit fournie, si possible

gratuitement, à ceux qui veulent présenter une demande de restitution. Cette assistance

peut être fournie par des sources gouvernementales ou non gouvernementales (qu'elles

soient nationales ou internationales), mais elle devrait satisfaire à des exigences suffisantes de

qualité, de non discrimination, d'équité et d'impartialité, de façon à ne pas compromettre le

processus de demande de restitution.

13.12 Les États devraient veiller à ce que nul ne soit persécuté ou puni pour avoir présenté une

demande de restitution.

#### **14. Modalités adéquates de consultation et de participation à la prise de décisions**

##### 14.1

Les États et les autres acteurs internationaux et nationaux impliqués devraient veiller à ce que

les programmes de rapatriement librement consenti et de restitution des logements, des terres

et des biens soient effectués en consultation avec les personnes, groupes et communautés

concernés et avec leur participation, selon des modalités adéquate

s.

#### 14.2

Les États et les autres acteurs internationaux et nationaux impliqués devraient veiller, en

particulier, à ce que les femmes, les peuples autochtones, les minorités raciales et ethniques,

les personnes âgées, les handicapés et les enfants soient adéquatement représentés et

inclus dans le processus de décision en matière de restitution et qu'ils aient les moyens et

l'information nécessaires pour y participer effectivement. Une attention particulière devrait

être accordée aux besoins des personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les

femmes chefs de famille, les mineurs séparés de leurs parents et non accompagnés, ainsi que

les handicapés.

#### **15. Registre des logements, des terres et des biens et documentation en la matière**



## 15.1

Les États devraient établir ou rétablir des plans cadastraux nationaux polyvalents ou d'autres

systèmes appropriés permettant d'enregistrer les droits sur les logements, les terres et les

biens en tant que partie intégrante de tout programme de restitution, en respectant les droits

des réfugiés et des personnes déplacées.

## 15.2

Les États devraient veiller à ce que toute décision judiciaire, quasi judiciaire, administrative

ou coutumière relative à la possession légitime de logements, de terres et/ou de biens, ou

aux droits sur ceux-ci, soit accompagnée de mesures visant à garantir l'enregistrement ou la

délimitation de ces logements, terres et/ou biens selon les modalités nécessaires pour garantir

la sécurité d'occupation au regard de la loi. Ces décisions doivent être conformes aux normes

internationales relatives aux droits de l'homme, aux réfugiés et au droit humanitaire ainsi

qu'aux normes connexes, notamment le droit d'être protégé de la discrimination.

### 15.3

Les États devraient veiller, s'il y a lieu, à ce que les systèmes d'enregistrement consignent ou reconnaissent les droits de propriété des communautés traditionnelles et autochtones sur les terres collectives.

### 15.4

Les États et les autres autorités ou institutions responsables devraient veiller à ce que les systèmes d'enregistrement existants ne soient pas détruits en période de conflit ou après le conflit. Les mesures visant à prévenir la destruction des registres des logements, des terres et des biens pourraient inclure la protection in situ ou, si nécessaire, leur mise à l'abri en lieu sûr ou auprès d'un dépositaire pour une courte durée. S'ils ont été déplacés, les registres devraient être ramenés dans le lieu d'origine dès que possible après la fin des hostilités. Les

États et les autres autorités responsables peuvent également envisager la mise en place de procédures pour copier les registres (y compris sous forme numérique), les transférer en toute sécurité et reconnaître l'authenticité des copies.

#### 15.5

Les États et les autres autorités ou institutions responsables devraient fournir au requérant

ou à la personne à qui il a donné procuration, à sa demande, des copies de toutes pièces

justificatives en leur possession nécessaires pour présenter ou appuyer une demande de

restitution. Ces pièces justificatives devraient être fournies gratuitement, ou moyennant une

contrepartie minimale.

#### 15.6

Les États et les autres autorités ou institutions responsables qui procèdent à l'enregistrement

des réfugiés ou des personnes déplacées devraient s'efforcer de recueillir des renseignements

permettant de faciliter le processus de restitution, par exemple en incluant dans le formulaire d'enregistrement des questions concernant l'emplacement et l'état du logement, des terres et des biens détenus précédemment par le réfugié ou la personne déplacée, ou de son lieu de résidence habituelle. Ces renseignements devraient être demandés lorsque des informations sont recueillies auprès des réfugiés et des personnes déplacées, y compris au moment de la fuite.

#### 15.7

Dans les situations de déplacement massif, où il n'existe guère de justificatifs des titres de propriété ou de jouissance, les États peuvent présumer que les personnes qui ont fui leur foyer pendant une période marquée par des violences ou une catastrophe l'ont fait pour

leurs terres et de leurs biens. En pareil cas, les autorités administratives et judiciaires peuvent,

de manière indépendante, établir les faits en rapport avec les demandes de restitution non accompagnées de pièces justificatives.

#### 15.8

Les États ne reconnaîtront pas comme valide toute transaction portant sur des logements, des

terres et/ou des biens, y compris toute cession, effectuée sous la contrainte ou en recourant,

de façon directe ou détournée, à la pression ou à la force, ou qui a été réalisée en violation

des normes internationales relatives aux droits de l'homme.

### **16. Les droits des locataires et autres personnes qui ne sont pas propriétaires**

#### **16.1**

Les États devraient veiller à ce que les droits des locataires, des détenteurs de droits sociaux

en matière d'occupation et d'autres occupants ou utilisateurs légitimes de logements, de

terres ou de biens, soient reconnus dans les programmes de restitution. Dans toute la mesure

possible, les États devraient veiller à ce que ces personnes puissent regagner leurs foyers et

leurs terres et en reprendre possession ainsi que de leurs biens et les utiliser, dans les mêmes

conditions que les personnes qui possèdent des titres officiels de propriété.

## **17. Occupants secondaires**

### 17.1

Les États devraient veiller à ce que les occupants secondaires soient protégés contre l'expulsion

arbitraire ou l'expulsion forcée illégale. Les États veillent à ce que, lorsque l'expulsion

de ces occupants est considérée comme justifiable et inévitable aux fins de la restitution

des logements, des terres et des biens, il y soit procédé de manière conforme aux normes

internationales relatives aux droits de l'homme, afin que les occupants secondaires bénéficient

des garanties d'une procédure équitable, y compris la possibilité d'être dûment consultés,

d'un préavis suffisant et raisonnable et d'un recours juridique, y compris la possibilité d'obtenir

réparation.

### 17.2

Les États devraient veiller à ce que les garanties d'une procédure équitable accordées aux

occupants secondaires ne portent pas atteinte aux droits des propriétaires légitimes, des

locataires et autres détenteurs de droits de reprendre possession de ces logements, des terres et

des biens en question de façon équitable et dans un délai raisonnable.

### 17.3

Lorsque l'expulsion des occupants secondaires est justifiable et inévitable, les États devraient

prendre des mesures positives pour éviter que ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer

un logement suffisant autre que celui qu'ils occupent actuellement se retrouvent sans abri et

soient victimes d'autres violations de leur droit à un logement suffisant. Les États devraient

s'employer à recenser et fournir d'autres logements et/ou terres pour ces occupants, y compris

à titre temporaire, afin de favoriser la restitution rapide du logement, des terres et des biens

aux réfugiés et aux personnes déplacées. Toutefois, l'absence de telles solutions de rechange

ne devrait pas retarder indûment l'application et l'exécution des décisions rendues par les

organes compétents en ce qui concerne la restitution des logements, des terres et des biens.

#### 17.4

Lorsque le logement, la terre ou les biens ont été vendus par les occupants secondaires à

des tiers agissant de bonne foi, les États peuvent envisager d'établir des mécanismes pour

indemniser les tiers lésés. Toutefois, on peut faire valoir que la notoriété du déplacement

implique la connaissance du caractère illégal de l'achat des biens abandonnés, ce qui exclut

en pareil cas la naissance de droits de bonne foi sur ces biens.

### **18. Mesures législatives**

#### 18.1

Les États devraient veiller à ce que le droit des réfugiés et des personnes déplacées s'applique à la restitution



de leur logement, de leurs terres et de leurs biens soit reconnu comme un élément essentiel

de l'état de droit. Les États devraient garantir le droit à la restitution des logements, des terres

et des biens par tous les moyens législatifs nécessaires, y compris l'adoption, l'amendement,

la réforme ou l'abrogation des lois, règlements ou pratiques pertinents. Il conviendrait que

les États mettent en place un cadre juridique clair, cohérent et, si nécessaire, au titre d'une loi

unique, en vue de protéger le droit à la restitution des logements, des terres et des biens.

## 18.2

Les États devraient veiller à ce que toutes les lois pertinentes définissent clairement toutes

les personnes et/ou groupes concernés qui ont droit en vertu de la loi à la restitution de

leur habitation, de leurs terres et de leurs biens, en particulier les réfugiés et les personnes

déplacées. Les ayants droit, notamment les membres de la famille résidents au moment du

déplacement, les conjoints, les concubins, les personnes à charge, les héritiers légitimes,

devraient également être reconnus et bénéficier du droit à la restitution au même titre que les

requérants principaux.

### 18.3

Les États devraient veiller à ce que la législation nationale relative à la restitution des

logements, des terres et des biens soit cohérente sur le plan interne et compatible avec les

accords pertinents préexistants, comme les accords de paix et les accords de rapatriement

librement consenti, dans la mesure où ces accords sont eux mêmes compatibles avec les

normes internationales relatives aux droits de l'homme, aux réfugiés et au droit humanitaire

ainsi que les normes connexes.

## **19. Interdiction d'adopter des lois arbitraires et discriminatoires**

### 19.1

Les États ne devraient ni adopter ni appliquer de lois qui portent atteinte au processus de

restitution, en particulier des lois relatives à l'abandon ou des dispositions relatives à la

prescription arbitraires, discriminatoires ou injustes.

### 19.2

Les États devraient prendre des mesures immédiates pour abroger les lois injustes ou

arbitraires et les lois qui ont un effet discriminatoire sur la jouissance du droit à la restitution

des logements, des terres et des biens et veiller à ce que ceux qui ont été lésés par l'application

antérieure de telles lois disposent de moyens de recours.

### 19.3

Les États devraient veiller à ce que toutes les politiques nationales relatives au droit à la

restitution des logements, des terres et des biens garantissent pleinement le droit des femmes

et des filles à être protégées de la discrimination et à l'égalité en vertu de la législation et dans

la pratique.

## **20. Application des décisions et jugements en matière de restitution**

### 20.1

Les États devraient désigner les organismes publics chargés de faire appliquer les décisions et

les jugements rendus en matière de restitution des logements, des terres et des biens.

### 20.2

Les États devraient veiller, par l'adoption de lois et tout autre moyen approprié, à ce que les

autorités locales et nationales soient tenues de respecter, de mettre en œuvre et d'appliquer

les décisions et jugements rendus par les organes compétents en ce qui concerne la restitution

des logements, des terres et des biens.

### 20.3

Les États devraient adopter des mesures spécifiques pour empêcher les particuliers de faire

obstruction à l'application des décisions et jugements rendus en matière de restitution des

logements, des terres et des biens. Les menaces ou les agressions contre des fonctionnaires et

des organismes exécutant des programmes de restitution devraient faire l'objet d'enquêtes et

de poursuites appropriées.

#### 20.4

Les États devraient adopter des mesures spécifiques pour empêcher la destruction ou le pillage des logements, des terres et des biens litigieux ou abandonnés. Afin de réduire au minimum les destructions et les pillages, les États devraient mettre en place, dans le cadre des programmes de restitution, des procédures pour inventorier le contenu des logements, des terres et des biens qui font l'objet d'une réclamation.

#### 20.5

Les États devraient mettre en place des campagnes d'information du public visant à informer les occupants secondaires et les autres parties concernées de leurs droits et des conséquences juridiques du non respect des décisions et jugements rendus en matière de restitution, notamment le refus d'évacuer de plein gré les logements, les terres et les biens occupés, ainsi que l'endommagement et/ou le pillage de ceux-ci.

### **21. Indemnisation**

## 21.1

Tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées ont droit à une indemnisation intégrale et effective en tant que partie intégrante du processus de restitution. L'indemnisation peut se

faire en numéraire ou en nature. Afin de se conformer au principe de la justice réparatrice,

les États veillent à ce qu'il ne soit procédé à une indemnisation en tant que moyen de recours

que lorsque la restitution n'est pas possible dans les faits ou que la partie lésée accepte

l'indemnisation en lieu et place de la restitution, en connaissance de cause et de son plein

gré, ou lorsque les termes d'un accord de paix négocié prévoient d'associer restitution et

indemnisation.

## 21.2

En règle générale, les États devraient veiller à ce que la restitution ne soit déclarée impossible

de fait que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsque le logement, les terres et/

ou les biens sont détruits ou n'existent plus, comme établi par un tribunal indépendant et

impartial. Même en pareil cas, la personne qui détient les droits sur le logement, les terres

et/ou les biens devrait, lorsque cela s'y prête, se voir offrir la possibilité de réparer ou de

reconstruire. Il se peut que, dans certains cas, le moyen de recours et la forme de justice

réparatrice les plus appropriés consistent à associer indemnisation et restitution.

## **Section VI. Le rôle de la communauté internationale, notamment des organisations**

### **internationales**

## **22. Responsabilité de la communauté internationale**

### **22.1**

La communauté internationale devrait promouvoir et protéger le droit à la restitution des

logements, des terres et des biens, ainsi que le droit au retour librement consenti dans la

sécurité et la dignité.

### **22.2**

Les institutions et organismes internationaux de financement, de commerce, de développement

et les autres entités apparentées, y compris les États membres ou les États donateurs ayant

voix délibérative au sein de ces organes, devraient tenir pleinement compte de l'interdiction

visant les déplacements illégaux ou arbitraires et, en particulier, l'interdiction, en vertu du

droit international relatif aux droits de l'homme et des normes connexes, de la pratique des

évictions forcées.

### 22.3

Les organisations internationales devraient agir de concert avec les gouvernements nationaux

et mettre en commun leur expertise concernant l'élaboration de politiques et de programmes

nationaux en matière de restitution des logements, des terres et des biens et aider à s'assurer

qu'ils sont compatibles avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme,

aux réfugiés et au droit humanitaire ainsi que les normes connexes. Les organisations

internationales devraient également apporter un appui pour le suivi de la mise en œuvre de



ces politiques et programmes.

#### 22.4

Les organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, devraient

s'efforcer de veiller à ce que les accords de paix et les accords de rapatriement librement

consenti contiennent des dispositions relatives à la restitution des logements, des terres et des

biens, notamment en prévoyant la mise en place de procédures, d'institutions, de mécanismes

et de cadres juridiques au niveau national.

#### 22.5

Dans l'exercice de leur mandat global, les opérations internationales de paix devraient

contribuer au maintien d'un environnement sûr et stable dans le cadre duquel des politiques

et programmes appropriés de restitution des logements, des terres et des biens puissent être

mis en œuvre et appliqués avec succès.

#### 22.6

Les opérations internationales de paix devraient, en fonction du contexte de la mission, être

priées d'appuyer la protection du droit à la restitution des logements, des terres et des biens,

notamment en faisant appliquer les décisions et jugements en matière de restitution. Les

membres du Conseil de sécurité devraient envisager d'inclure ce rôle dans le mandat des

opérations de paix.

22.7

Les organisations et les opérations de paix internationales devraient éviter d'occuper, de louer

ou d'acquérir des logements, des terres et des biens auxquels les propriétaires en titre n'ont

pas accès actuellement ou dont ils sont dépossédés, et exiger de leur personnel qu'il fasse de

même. Elles devraient veiller aussi à ce que les organismes ou mécanismes placés sous leur contrôle ou leur supervision n'entravent pas, directement ou indirectement, la restitution des logements, des terres et des biens.

## **Section VII. Interprétation**

### **23. Interprétation**

23.1 Les Principes concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées ne seront pas interprétés

comme limitant ou modifiant les droits consacrés par les normes internationales relatives aux droits de l'homme, aux réfugiés et au droit humanitaire et les normes connexes, ou les droits conformes à ces règles et normes reconnues en droit interne, ni comme portant atteinte à ces droits.

**CONVENTION DE L'UNION AFRICAINE SUR LA  
PROTECTION ET ASSISTANCE AUX  
PERSONNES DÉPLACÉES EN AFRIQUE  
(CONVENTION DE KAMPALA)**

## **Préambule**

**Nous, Chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine ;**

**CONSCIENTS** de la gravité de la situation des personnes déplacées qui constitue une source d'instabilité et de tension continues pour les États africains ;

**ÉGALEMENT CONSCIENTS** de la souffrance et de la vulnérabilité spécifique des personnes déplacées ;

**RÉITÉRANT** la coutume et la tradition africaines inhérentes d'hospitalité par les Communautés locales d'accueil pour les personnes en détresse, et l'appui à ces communautés ;

**ENGAGÉS** à partager notre vision commune consistant à apporter des solutions durables aux situations des personnes déplacées, en mettant en place un cadre juridique approprié pour leur apporter protection et assistance ;

**DÉTERMINÉS** à adopter les mesures destinées à prévenir et mettre fin au phénomène de déplacement interne, par l'éradication de ses causes premières, particulièrement les conflits persistants et récurrents, ainsi que le déplacement causé par les catastrophes naturelles, qui ont un impact dévastateur sur la vie humaine, la paix, la stabilité, la sécurité et le développement ;

**CONSIDÉRANT** l'Acte constitutif de l'Union africaine de l'an 2000 et la Charte des Nations Unies de 1945 ;

**RÉAFFIRMANT** le principe de respect de l'égalité souveraine des États parties, de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, tel qu'énoncé par l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte des Nations Unies ;

**RAPPELANT** la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967, la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et le Protocole de 2003 à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, la Charte africaine de 1990 des droits et du bien-être de l'enfant, le Document de 1994 d'Addis-Abeba sur les réfugiés et le déplacement forcé des populations en Afrique, et autres instruments pertinents de l'Union africaine et des Nations Unies sur les droits de l'homme, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité ;



**AYANT A L'ESPRIT** que les États membres de l'Union africaine ont adopté des pratiques démocratiques et ont adhéré aux principes de non-discrimination et d'égalité de tous devant la loi, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi que d'autres instruments juridiques régionaux et internationaux sur les droits de l'homme ;

**RECONNAISSANT** les droits imprescriptibles des personnes déplacées, tels que prévus et protégés par les droits de l'homme et le droit international humanitaire, et tels qu'inscrits dans les Principes directeurs des Nations Unies de 1998 sur le déplacement interne, reconnus comme un cadre international important pour la protection des personnes déplacées ;

**AFFIRMANT** notre responsabilité première et notre engagement à respecter, protéger et mettre en application les droits des personnes déplacées, sans discrimination aucune ;

**PRENANT NOTE** du rôle spécifique des organisations et agences internationales, dans le cadre de l'approche de collaboration inter-agences des Nations Unies concernant les personnes déplacées, particulièrement de l'expertise du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en matière de protection des personnes déplacées, et la demande qui lui a été faite par le Conseil exécutif de l'Union africaine dans la Décision EX/CL.413 (XIII) de juillet 2008 à Sharm El-Sheikh (Égypte) à poursuivre et à renforcer son rôle dans la protection et l'assistance aux personnes déplacées dans le cadre du mécanisme de coordination des Nations Unies ; et **PRENANT NOTE ÉGALEMENT** du mandat du Comité international de la Croix Rouge d'assurer la protection et l'assistance aux personnes affectées par les conflits armés et autres situations de violence, ainsi que des activités des organisations de la société civile, conformément à la législation des pays où ils exercent leurs rôles et mandats ;

**RAPPELANT** l'absence d'un cadre juridique et institutionnel africain et international contraignant spécialement consacré à la prévention du déplacement interne, à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées ;

**RÉAFFIRMANT** l'engagement historique des États membres de l'UA, d'assurer aux réfugiés et aux personnes déplacées la protection et l'assistance et, en particulier, de mettre en œuvre les Décisions Ex.CL/127(V) et Ex.CL/Dec.129 (V) adoptées par le Conseil exécutif, à Addis-Abeba en juillet 2004, en répondant aux besoins spécifiques des personnes déplacées, tels que la protection et l'assistance à travers un instrument juridique distinct, et de collaborer avec les partenaires concernés et d'autres acteurs pour donner aux personnes déplacées un cadre juridique approprié qui leur garantisse une protection et une assistance adéquates, et qui permette la mise en œuvre de solutions durables ;

**CONVAINCUS** que la présente Convention sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées présente un tel cadre juridique ;

**CONVENONS DE CE QUI SUIT :**



## Article premier Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

- a. « Charte africaine » : la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- b. « Commission africaine » : la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- c. « Cour africaine de justice et des droits de l'homme » : la Cour africaine de justice et des droits de l'homme ;
- d. « Déplacement arbitraire » : le déplacement arbitraire tel que visé à l'article 4 (4) (a) à (h)
- e. « Groupes armés » : les forces armées dissidentes ou autres groupes armés organisés distincts des forces armées de l'État.
- f. « UA » : Union africaine ;
- g. « Commission de l'UA » : le Secrétariat de l'Union africaine, dépositaire des instruments régionaux ;
- h. « Enfant » : tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ;
- i. « Acte constitutif » : l'Acte constitutif de l'Union africaine ;
- j. « Pratiques néfastes » : tous comportements, attitudes et/ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu'entre autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l'intégrité mentale et physique et à l'éducation ;
- k. « Personnes déplacées » : les personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d'éviter les effets des conflits armés, des situations de violence généralisée, des violations des droits de l'homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, et qui n'ont pas traversé une frontière d'État internationalement reconnue ;
- l. « Déplacement interne » : le mouvement, l'évacuation ou la réinstallation involontaires ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'un État ;
- m. « État membre » : un État membre de l'Union africaine ;
- n. « Acteurs non étatiques » : les acteurs privés qui ne sont pas des responsables officiels de l'État, y compris les groupes armés non visés à



- l'article 1 (d) susmentionné et dont les actes ne peuvent être imputés officiellement à l'État ;
- o. « OUA » : l'Organisation de l'Unité africaine ; et,
  - p. « Femmes » : les personnes de sexe féminin, y compris les jeunes filles ;
  - q. « Normes de sphère » : normes de suivi et d'évaluation de l'efficacité et de l'impact de l'assistance humanitaire ;
  - r. « États parties » : les États africains qui ont ratifié ou accédé à cette Convention.

## **Article 2 Objectifs**

La présente Convention vise à :

- a. Promouvoir et renforcer les mesures régionales et nationales destinées à prévenir ou atténuer, interdire et éliminer les causes premières du déplacement interne, et prévoir des solutions durables ;
- b. Mettre en place un cadre juridique de prévention du déplacement interne, de protection et d'assistance aux personnes déplacées en Afrique ;
- c. Mettre en place un cadre juridique de solidarité, de coopération, de promotion de solutions durables, et d'appui mutuel entre les États parties, en vue de combattre le déplacement, et prendre en charge ses conséquences ;
- d. Définir les obligations et responsabilités des États parties concernant la prévention du déplacement interne ainsi que la protection et l'assistance aux personnes déplacées ;
- e. Définir les obligations, responsabilités et rôles respectifs des groupes armés, acteurs non étatiques, et autres acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile, concernant la prévention du déplacement interne, la protection et l'assistance aux personnes déplacées ;

## **Article 3 Obligations générales des États parties**

1. Les États parties s'engagent à respecter et à assurer le respect de la présente Convention, et tout particulièrement, à :
  - a. S'abstenir de pratiquer, interdire, prévenir le déplacement arbitraire des populations ;
  - b. Prévenir l'exclusion et la marginalisation politiques, sociales, culturelles, susceptibles de causer le déplacement de populations ou de personnes en vertu de leur identité, leur religion ou leur opinion politique ;





- c. Respecter et assurer le respect des principes d'humanité et de dignité humaine des personnes déplacées ;
- d. Respecter et assurer le respect et la protection des droits humains des personnes déplacées, y compris un traitement empreint d'humanité, de non discrimination, d'égalité et de protection égale par le droit ;
- e. Respecter et assurer le respect du droit international humanitaire concernant la protection des personnes déplacées ;
- f. Respecter et assurer le respect du caractère humanitaire et civil de la protection et de l'assistance aux personnes déplacées, en veillant notamment à ce que ces personnes ne se livrent pas à des activités subversives ;
- g. S'assurer de la responsabilité individuelle des auteurs d'actes de déplacement arbitraire, conformément au droit pénal national et international en vigueur ;
- h. S'assurer de la responsabilité des acteurs non étatiques concernés, y compris les entreprises multinationales et entreprises militaires ou de sécurité privées, pour les actes de déplacement arbitraire ou de complicité dans de tels actes ;
- i. Assurer la responsabilité des acteurs non étatiques impliqués dans l'exploration et l'exploitation des ressources économiques et naturelles, ayant pour conséquence des déplacements de population ;
- j. Porter assistance aux personnes déplacées en assurant la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, en autorisant et facilitant un accès rapide et libre aux organisations et au personnel humanitaires ;
- k. Assurer la promotion des moyens autonomes et durables en faveur des personnes déplacées, à condition que ces moyens ne soient pas utilisés comme prétexte pour négliger la protection et l'assistance à ces personnes, sans préjudice de tout autre moyen d'assistance.

## 2. Les États parties :

- a. Incorporent les obligations de la présente Convention dans leur droit interne, par la promulgation ou l'amendement de la législation pertinente relative à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées, en conformité avec leurs obligations en vertu du droit international.
- b. Désignent une Autorité ou un Organe, si nécessaire, qui serait, chargé de la coordination des activités visant à assurer l'assistance aux personnes déplacées et à assigner des responsabilités aux organisations pertinentes en terme de protection et d'assistance et de coopération avec les organisations ou agences internationales



compétentes et avec les organisations de la société civile, là où il n'existe pas ce type d'organisation ou d'autorité ;

- c. Adoptent toutes autres mesures, politiques et stratégies nationales appropriées relatives au déplacement interne, en tenant compte des besoins des communautés d'accueil ;
- d. Procurent, autant que possible, les fonds nécessaires pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées, sans préjudice de la réception de l'aide internationale.
- e. S'efforcent de prendre en considération les principes pertinents contenus dans la présente Convention lors des négociations des Accords de paix et tout autre Accord en vue de trouver des solutions durables au problème de déplacement interne.

#### **Article 4** **Obligations des États parties relatives** **à la Protection contre le déplacement interne**

1. Les États parties respectent et veillent au respect de leurs obligations en vertu du droit international, notamment les droits de l'homme et le droit humanitaire, afin de prévenir et d'éviter les situations pouvant conduire au déplacement arbitraire de personnes.
2. Les États parties mettent au point des systèmes d'alerte précoce dans le cadre du système continental d'alerte précoce dans les zones de déplacement potentiel, élaborent et mettent en œuvre des stratégies de réduction du risque de catastrophes, des mesures d'urgence, de réduction et de gestion des catastrophes, et fournissent si nécessaire, la protection et l'assistance d'urgence aux personnes déplacées.
3. Les États parties peuvent solliciter la coopération des organisations ou agences humanitaires, des organisations de la société civile et d'autres acteurs concernés.
4. Toute personne a le droit d'être protégée contre le déplacement arbitraire. Les catégories de déplacement arbitraire interdites sont, entre autres :
  - a. Déplacement basé sur les politiques de discrimination raciale ou autres pratiques similaires, visant à altérer la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population ;
  - b. Déplacement individuel ou massif de civils en situation de conflit armé, sauf pour des raisons de sécurité des civils impliqués ou des impératifs d'ordre militaires conformément au droit international humanitaire ;
  - c. Déplacement utilisé intentionnellement comme méthode de guerre ou autres violations du droit international humanitaire dans des situations de conflit armé ;



- d. Déplacement issu des situations de violence ou de violations généralisées des droits de l'homme ;
  - e. Déplacement résultant de pratiques néfastes ;
  - f. Évacuations forcées dans les cas de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou par d'autres causes si les évacuations ne sont pas exigées par la sécurité et la santé des personnes affectées ;
  - g. Déplacement utilisé comme punition collective ;
  - h. Déplacement causé par un acte, un évènement, un facteur ou un phénomène d'une gravité similaire à ceux ci-dessus cités et qui soit non justifié par le droit international, en particulier les droits de l'homme et le droit international humanitaire.
5. Les États parties s'efforcent de protéger contre leur déplacement de ces zones, les communautés spécialement attachées et dépendantes de leur terre, en raison de leur culture et de leurs valeurs spirituelles particulières, sauf en cas de nécessité impérieuse dictée par les intérêts publics.
6. Les États parties déclarent comme infractions punissables par la loi, les actes de déplacement arbitraire pouvant être assimilés à un génocide, à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité.

#### **Article 5**

#### **Obligations des États parties relatives à la protection et à l'assistance**

1. Les États parties assument leur devoir et leur responsabilité première, d'apporter protection et assistance humanitaire aux personnes déplacées, au sein de leur territoire ou de leur juridiction, sans discrimination aucune.
2. Les États parties coopèrent, à l'initiative de l'État concerné ou de la Conférence des États Parties, en vue de protéger et d'assister les personnes déplacées.
3. Les États parties respectent les mandats de l'Union africaine et des Nations Unies, ainsi que le rôle des organisations humanitaires internationales pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées, conformément au droit international.
4. Les États parties prennent les mesures nécessaires pour assurer protection et assistance aux personnes victimes de déplacement interne en raison de catastrophes naturelles ou humaines y compris du changement climatique.
5. Les États parties évaluent ou facilitent l'évaluation des besoins et des vulnérabilités des personnes déplacées et des communautés d'accueil, en coopération avec les organisations ou agences internationales.



6. Les États parties assurent suffisamment de protection et d'assistance aux personnes déplacées, et en cas d'insuffisance des ressources maximales disponibles pour leur permettre de le faire, coopèrent en vue de solliciter l'assistance des organisations internationales ou des agences humanitaires, des organisations de la société civile et des autres acteurs concernés. Ces organisations peuvent offrir leurs services à tous ceux qui en ont besoin.
7. Les États parties prennent les mesures nécessaires pour organiser les opérations de secours à caractère humanitaire et impartial, et garantir les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité. Les États parties autorisent le passage rapide et libre de toutes les opérations, tous les équipements et de tout le personnel de secours au bénéfice des personnes déplacées. Les États parties rendent également possible et facilitent le rôle des organisations locales et internationales, des agences humanitaires, ainsi que des organisations de la société civile, et d'autres acteurs pertinents, afin d'apporter protection et assistance aux personnes déplacées. Les États parties ont le droit de prescrire les conditions techniques sous lesquelles ce passage est autorisé.
8. Les États parties soutiennent et assurent le respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance des organisations humanitaires.
9. Les États parties respectent le droit des personnes déplacées à demander pacifiquement protection et assistance conformément aux législations nationales et internationales pertinentes, un droit pour lequel elles ne seront pas persécutées, poursuivies, ni punies.
10. Les États parties respectent et protègent et n'attaquent ni portent préjudice au personnel et au matériel déployés pour l'assistance au profit des personnes déplacées.
11. Les États parties prennent les mesures nécessaires visant à garantir que les groupes armés respectent leurs obligations au titre de l'article 7.
12. Aucune disposition du présent article ne peut porter atteinte aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États.

#### **Article 6 :**

#### **Obligations des organisations internationales et des agences humanitaires**

1. Les organisations internationales et les agences humanitaires assument leurs obligations au titre de cette convention conformément au droit international et aux lois du pays dans lequel elles opèrent.
2. Dans le cadre de la protection et de l'assistance aux personnes déplacées, les organisations internationales et agences humanitaires respectent les droits de ces personnes conformément au droit international.



3. Les organisations internationales et les agences humanitaires sont liées par les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance des acteurs humanitaires et respectent les normes et codes de conduite internationaux appropriés.

#### **Article 7**

#### **Protection et assistance aux personnes déplacées dans les situations de conflit armé**

1. Les dispositions du présent Article ne peuvent d'aucune manière être interprétées comme accordant un statut juridique ou une reconnaissance légale aux groupes armés. Elle n'exonère pas de la responsabilité pénale individuelle des membres de tels groupes en vertu du droit pénal national ou international.
2. Aucune disposition du présent Article ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
3. La protection et l'assistance aux personnes déplacées au titre du présent article sont régies par le droit international, en particulier le droit humanitaire international.
4. Les membres des groupes armés sont tenus pénalement responsables de leurs actes qui violent les droits des personnes déplacées aux termes du droit international et de la législation nationale.
5. Il est interdit aux membres des groupes armés de :
  - a) Procéder à des déplacements arbitraires ;
  - b) Entraver, en quelque circonstance que ce soit, la fourniture de la protection et de l'assistance aux personnes déplacées ;
  - c) Nier aux personnes déplacées, le droit de vivre dans des conditions satisfaisantes de dignité, de sécurité, d'assainissement, d'alimentation, d'eau, de santé et d'abri, et de séparer les membres d'une même famille ;
  - d) Restreindre la liberté de mouvement des personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur de leurs zones de résidence ;
  - e) Recruter, en quelque circonstance que ce soit, des enfants, de leur demander ou de leur permettre de participer aux hostilités ;
  - f) Recruter par la force des individus, de se livrer à des actes d'enlèvement, de rapt ou de prise d'otages, d'esclavage sexuel et de trafic d'êtres humains, notamment des femmes et des enfants ;
  - g) Empêcher l'assistance humanitaire et l'acheminement des secours, des équipements et du personnel au profit des personnes déplacées ;



- h) Attaquer ou nuire au personnel et au matériel déployés pour l'assistance au profit des personnes déplacées, et de détruire, de confisquer ou de détourner ces matériels ;
- i) Violer le caractère civil et humanitaire des lieux où les personnes déplacées sont accueillies et de s'infiltrer dans ces lieux.

**Article 8**  
**Droits et obligations de l'Union africaine**

1. L'Union africaine a le droit d'intervenir dans un État partie, conformément à l'Article 4(h) de l'Acte constitutif, dans de circonstances graves, notamment les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité.
2. L'Union africaine respecte le droit des États parties de solliciter son intervention pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif, aux fins de contribuer à la création de conditions favorables, et de rechercher des solutions durables au problème du déplacement interne.
3. L'Union africaine soutient les efforts que déploient des États parties pour protéger et porter assistance aux personnes déplacées conformément à la présente Convention. En particulier l'Union :
  - a. Renforce son cadre institutionnel et la sa capacité concernant la protection et l'assistance aux personnes déplacées ;
  - b. Coordonne la mobilisation des ressources pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées ;
  - c. Collabore avec les organisations internationales et agences humanitaires, les organisations de la société civile et autres acteurs concernés, conformément à leurs mandats, pour appuyer les mesures prises par les États parties en vue d'apporter protection et assistance aux personnes déplacées ;
  - d. Coopère directement avec les États africains et les organisations internationales et agences humanitaires, les organisations de la société civile et autres acteurs concernés, conformément aux mesures appropriées à prendre par rapport à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées ;
  - e. Partage les informations avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la situation de déplacement, la protection et l'assistance accordées aux personnes déplacées en Afrique ; et
  - f. Coopère avec le Rapporteur spécial de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour les réfugiés, les rapatriés, les



personnes déplacées et les requérants d'asile pour traiter les problèmes des personnes déplacées.

### Article 9

#### Obligations des États parties relatives à la protection et à l'assistance durant le déplacement interne

1. Les États parties protègent les droits des personnes déplacées, quelle que soit la cause de déplacement, en s'abstenant de pratiquer, et en prévenant les actes suivants, entre autres :
  - a. La discrimination dans la jouissance de tout droit et ou toute liberté, du fait de leur condition de personnes déplacées.
  - b. Le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et autres violations du droit international humanitaire ;
  - c. Le meurtre arbitraire, les exécutions sommaires, la détention arbitraire, l'enlèvement, la disparition forcée, la torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumains et dégradants ;
  - d. La violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment le viol, la prostitution forcée, l'exploitation sexuelle, et les pratiques néfastes, l'esclavage, le recrutement d'enfants et leur utilisation dans les hostilités, travail forcé, trafic et détournement d'êtres humains ; et
  - e. La famine.
1. Les États parties s'engagent à :
  - a. Prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes déplacées un accueil sans discrimination aucune, et qu'ils vivent dans des conditions satisfaisantes de sûreté, de dignité et de sécurité ;
  - b. Fournir aux personnes déplacées, dans la plus large mesure possible et dans les plus brefs délais, l'assistance humanitaire adéquate, notamment l'alimentation, l'eau, l'abri, les soins médicaux et autres services de santé, l'assainissement, l'éducation, et tous autres services sociaux nécessaires. Cette assistance peut être étendue, en cas de besoin, aux communautés locales et d'accueil ;
  - c. Apporter une protection spéciale et une assistance aux personnes déplacées ayant des besoins spéciaux, notamment les enfants séparés et non accompagnés, les femmes chefs de ménage, les femmes enceintes, les mères accompagnées de jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées ou souffrant de maladies transmissibles ;



- d. Prendre des mesures spéciales visant à protéger et prévoir la santé reproductive et sexuelle des femmes déplacées, ainsi que l'appui psychosocial approprié aux victimes d'abus sexuels et autres ;
- e. Respecter et assurer aux personnes déplacées le droit de rechercher la sécurité dans une autre région de leur État, et d'être protégées contre le retour forcé ou la réinstallation dans un lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur santé seraient à risque ;
- f. Garantir la liberté de mouvement et de choix de résidence des personnes déplacées, excepté dans les cas où les restrictions sur ces mouvements et ce choix de résidence sont nécessaires, justifiées, et proportionnées pour des raisons de sécurité, ou pour des raisons d'ordre et de santé publique ;
- g. Respecter et maintenir le caractère civil et humanitaire des lieux d'accueil des personnes déplacées, et protéger ces lieux contre l'infiltration par des groupes ou éléments armés, désarmer et séparer ces groupes ou éléments de la population des personnes déplacées ;
- h. Prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en place de mécanismes spécialisés, pour retrouver et réunifier les familles séparées durant le déplacement, en vue du rétablissement des liens familiaux ;
- i. Prendre les mesures nécessaires pour protéger les biens individuels, collectifs et culturels abandonnés par les personnes déplacées, ainsi que les zones où sont localisées les personnes déplacées ; soit dans la juridiction des États parties, ou dans les secteurs sous leur contrôle effectif ;
- j. Prendre les mesures nécessaires de sauvegarde contre la dégradation de l'environnement dans les zones où sont localisées les personnes déplacées, dans la juridiction des États parties ou dans les secteurs sous leur contrôle effectif ;
- k. Consulter les personnes déplacées et leur permettre de participer aux prises de décisions relatives à la protection et à l'assistance qui leur sont apportées.
- l. Prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes déplacées, citoyens dans leurs pays d'origine, puissent jouir et exercer leurs droits civiques et politiques, particulièrement le droit à la participation publique, notamment le droit de voter et d'être éligible aux fonctions publiques ; et
- m. Mettre en place des mesures en vue d'assurer l'efficacité du suivi et de l'évaluation de l'impact de l'assistance humanitaire fournie aux





personnes déplacées, conformément à la pratique prescrite dans les Normes Sphère.

2. Les États parties s'acquittent de toutes ces obligations, le cas échéant, avec l'assistance des organisations internationales et des agences humanitaires, des organisations de la société civile, et d'autres acteurs pertinents,

#### **Article 10** **Déplacement provoqué par des projets**

1. Les États parties préviennent, dans la mesure du possible, le déplacement provoqué par les projets réalisés par les acteurs publics ou privés.
2. Les États parties assurent que les acteurs publics ou privés explorent toutes les alternatives réalisables sur la base de l'entière information et consultation des personnes susceptibles d'être déplacées en raison de projets.
3. Les États parties entreprennent une évaluation de l'impact socio-économique et environnemental de toute proposition de projet de développement avant la mise en œuvre de ce projet.

#### **Article 11** **Obligations des États parties relatives au retour à l'intégration locale ou et à la réinstallation durables**

1. Les États parties recherchent des solutions durables au problème de déplacement, par la promotion et la création de conditions satisfaisantes pour le retour volontaire, l'intégration locale ou la réinstallation de manière durable, et dans des conditions de sécurité et de dignité.
2. Les États parties permettent aux personnes déplacées de faire un choix libre et en toute connaissance de cause sur leur retour, leur intégration locale ou leur réinstallation. Ils les consultent sur toutes les options possibles, et s'assurent de leur participation à la recherche de solutions durables
3. Les États parties coopèrent, autant que possible, avec l'Union africaine et les organisations internationales, agences humanitaires et organisations de la société civile, pour fournir la protection et l'assistance lors de la recherche et la mise en œuvre de solutions pour le retour durable, l'intégration locale, la réinstallation des personnes déplacées et pour la reconstruction à long terme.
4. Les États parties établissent des mécanismes appropriés prévoyant des procédures simplifiées, si nécessaire, pour la résolution des litiges relatifs aux biens des personnes déplacées.
5. Les États parties prennent, dans la mesure du possible, les mesures appropriées pour restaurer, lors de leur retour, leur réinstallation ou leur réinsertion, les terres des communautés qui en sont spécialement dépendantes et y sont attachées.



## **Article 12 Compensation**

1. Les États parties fournissent aux personnes affectées par le déplacement interne des solutions adéquates.
2. Les États parties mettent en place un cadre juridique adéquat aux fins d'apporter une compensation juste et équitable, et de fournir d'autres formes de réparation, le cas échéant, aux personnes déplacées pour les dommages résultant du déplacement, conformément aux normes internationales.
3. Tout État partie est tenu de réparer les dommages causés aux personnes déplacées, lorsque ces États se sont abstenus de protéger et d'assister les personnes déplacées en cas de catastrophes naturelles.

## **Article 13 Enregistrement et documentation**

1. Les États parties peuvent créer et maintenir un registre à jour de toutes les personnes déplacées dans leur juridiction ou sous leur contrôle effectif. Ce faisant, les États parties peuvent travailler en collaboration avec les organisations internationales, les agences humanitaires ou les organisations de la société civile.
2. Les États parties garantissent que soient délivrés aux personnes déplacées internes les actes d'état civil et autres documents d'identité nécessaires pour la jouissance et l'exercice de leurs droits tels que les passeports, documents d'identité personnelle, certificats civils, extraits d'actes de naissance et de contrats de mariage.
3. Les États parties facilitent la délivrance de nouveaux documents ou le remplacement de documents perdus ou détruits au cours du déplacement, sans imposer des conditions non raisonnables telles que l'exigence du retour dans le lieu habituel de résidence en vue d'obtenir ces documents. La non délivrance de ces documents ne doit en aucun cas entraver l'exercice de leurs droits.
4. Les femmes et les hommes ainsi que les enfants non accompagnés ont également le droit d'obtenir les documents d'identité nécessaires, et à les détenir en leur nom propre.

## **Article 14 Mécanisme de suivi**

1. Les États parties conviennent de créer une Conférence des États parties à la présente Convention, de suivre et d'examiner la mise en œuvre des objectifs de la présente Convention.



2. Les États parties renforcent leur capacité en matière de coopération et d'assistance mutuelle, sous les auspices de la Conférence des États parties.
3. Les États parties conviennent de l'organisation régulière de la Conférence des États parties et de sa facilitation par l'Union africaine.
4. Les États parties, en présentant leur rapport conformément à l'Article 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le cas échéant, dans le cadre du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, indiquent les mesures législatives et autres qu'ils ont prises pour donner effet à la présente Convention.

## **DISPOSITIONS FINALES**

### **Article 15 Application**

1. Les États parties conviennent qu'à l'exception des cas expressément indiqués dans cette Convention, ses dispositions s'appliquent à toutes les situations de déplacement interne indépendamment de ses causes.
2. Les États parties conviennent qu'aucun aspect de cette Convention ne saurait être conçu comme accordant un statut légal ou comme une reconnaissance des groupes armés et que ses dispositions n'exonèrent pas de leur responsabilité pénale individuelle leurs membres en vertu du droit pénal national ou international.

### **Article 16 Signature, ratification et adhésion**

1. La présente Convention est ouverte à la signature, ratification ou adhésion par les États membres de l'UA conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l'Union africaine.

### **Article 17 Entrée en vigueur**

1. La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par les quinze (15) États membres.
2. Le Président de la Commission notifie aux États membres l'entrée en vigueur de la présente Convention.



### **Article 18**

#### **Amendement et Révision**

1. Les États Parties peuvent soumettre des propositions d'amendement ou de révision à la présente Convention.
2. Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises par écrit au Président de la Commission qui en communique copies aux États parties dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions d'amendement dans un délai d'un (1) an, suivant la date de notification aux États membres conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Les amendements proposés ou la révision sont approuvés par la Conférence des États parties à la majorité simple des États Parties présents et votants.
5. Les amendements entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15) instruments de ratification des États parties auprès du Président de la Commission de l'Union africaine.

### **Article 19**

#### **Dénonciation**

1. Un État membre peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Président de la Commission de l'Union africaine et indiquer les motifs de la dénonciation.
2. La dénonciation prend effet un (1) an après la date de la réception de la notification par le Président de la Commission de l'UA à moins qu'une date ultérieure n'ait été spécifiée.

### **Article 20**

#### **Clause de sauvegarde**

1. Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme affectant ou réduisant le droit des personnes déplacées à rechercher et jouir de l'asile accordé dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et de chercher protection en tant que réfugié dans le cadre de la Convention de l'OUA de 1969 régissant les Aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ou la Convention des Nations Unies de 1951 relative à la situation des réfugiés ainsi que son Protocole de 1967.
2. La présente Convention est sans préjudice des droits humains des personnes déplacées dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou d'autres instruments applicables du droit international sur les droits de l'homme ou du droit humanitaire international et ne saurait en aucune manière être comprise ou interprété comme restreignant, modifiant ou entravant la protection existant dans le cadre de l'un de ces instruments.



3. Le droit des personnes déplacées de porter plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ou tout autre organe international compétent ne doit en aucune manière être affecté par la présente Convention.
4. Les dispositions de cette Convention sont sans préjudice de la responsabilité pénale individuelle des personnes déplacées dans le cadre du droit pénal national ou international et de leurs devoirs selon la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

#### **Article 21** **Réserves**

Les États parties ne peuvent, ni émettre ni introduire des réserves relatives à cette convention qui seraient non compatibles avec ses objectifs et ses buts.

#### **Article 22** **Règlement des Différends**

1. Tout différend entre les États Parties portant sur l'interprétation ou l'application de la Présente Convention est réglé à l'amiable par un accord direct entre les Parties concernées. En l'absence d'un tel règlement à l'amiable, le différend peut être soumis par tout État Partie au règlement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
2. Jusqu'à la mise en place de celle-ci, le différend est soumis à la Conférence qui tranche par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des États parties présents et votants

#### **Article 23** **Dépositaire**

1. La présente Convention sera déposée auprès du Président de la Commission de l'UA qui en communique une copie certifiée au Gouvernement de chaque État signataire.
2. Le Président de la Commission de l'UA enregistre la présente Convention dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.
3. La présente Convention est enregistrée en quatre (04) exemplaires originaux en langues anglaise, arabe, française et portugaise, les quatre textes faisant également foi.

**ADOPTÉE PAR LE SOMMET SPÉCIAL DE L'UNION  
TENU LE 23 OCTOBRE 2009  
À KAMPALA (OUGANDA)**



## **BIBLIOGRAFÍA**

## OBRAS

- BELORGEY, Jean Michel. *Le droit d'asile*. Paris: LGDJ. Lextenso éditions, 2013.
- CASANOVAS, Oriol. *La Protection Internationale des personnes déplacées dans les conflits armés*. Vol. 305, chez *Recueil de Cours de l'Académie du droit international de la Haye*, de Aca, 9-176. La Haye: Académie de droit international de la Haye, 2005.
- COHEN, Roberta. «Protection of Internally Displaced persons: National and International responsibilities.» Dans *Research Handbook on International Law and Migration*, 590-611. Vincent Chetail et Céline Bauloz, 2014.
- COMBACAU, Jean, et Serge SUR. *Droit International Public*. Montchreistein, Lextenso éditions, 2008.
- DUCHATELLIER, Moetsi, et Catherine PHUONG. «The African contribution to the protection of internally displaced persons: A commentary in the 2009 Kampala Convention.» Dans *Research Handbook on International Law and migration*, 650-667. Vincent CHETAIL et Céline Bauloz, 2014.
- KALIN, Walter. «The Guiding Principles on Internal Displacement and the search for a universal framework of protection for internally displaced persons.» Dans *Research Handbook on International Law and migration*, 612-633. Vincent Chetail et Céline Bauloz, 2014.
- OJEDA, Stephane. «International humanitarian law and the protection of internally displaced persons.» Dans *Research Handbook on International Law and Migration*, 634-649. 2014.
- SALOMON, Robert. *Les réfugiés "Que sais-je?"*. Presses Universitaires de France, 1963.
- VENGOECHEA BARRIOS, Juliana Maria. «Reparations as preemptive State Defense, possible gaps, risks and challenges faced by migrants.» Dans *The law on International Litigation. Legal tools and strategy for international dispute resolution in the 21st century*, édité par Rafael A. Prieto Sanjuan. Pontificia Universidad javeriana, Grupo Ibañez, 2015.

## REVISTAS

- CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. «Le déracinement et la protection des migrants dans le droit international des droits de l'homme.» *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, n° 74 (2008): 289-328.
- COURNIL, Christel. «L'émergence d'un droit pour les personnes déplacées à l'intérieur.» *Revue québécoise de droit international*, 2009: 1-25.
- GOLDMAN, Robert K. «Codification des règles internationales relatives aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays.» *Revue Internationale de la Croix Rouge*, n° 831 (septembre 1998).
- GOLDMAN, Robert K. «Internal displacement, the Guiding Principles on Internal Displacement, the Principles Normative Status, and the need for their effective implementation in Colombia.» *Anuario Colombiano de Derecho Internacional* 2 (février 2009): 59-86.
- International Committee of the Red Cross and Red Crescent Societies for the Council of Delegates of the International Red Cross and Red Crescent Movements. «Movement Policy on Internal Displacement.» *International Review of the Red Cross*, septembre 2009: 593-612.
- KELLENBERG, Jakob. «The ICRC's response to internal displacement: strengths, challenges and constraints.» *International Review of the Red Cross* 91, n° 875 (2009): 475-490.
- ORCHARD, Phil. «Protection of internally displaced persons: soft law as a norm-generating mechanism.» *Review of International Studies* (Cambridge University Press) 36, n° 2 (avril 2010): 281-303.
- SILSKA, Magdalena. «Protection of internally displaced persons: As an international legal obligation?» *Polish yearbook of international law*, 2015: 249-272.

WILLMS, Jan. «Without order anything goes? The prohibition of forced displacement in non-international armed conflict.» *International Review of the Red CROSS* 91, n° 875 (2009): 547-566.

## **JURISPRUDENCIA**

*Affaire Chitay Nech et autres c. Guatemala.* (Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, 25 mai 2010).

*Affaire Dogan C. Turquie.* (Cour Européenne des Droits de l'Homme, 29 juin 2004).

*Affaire Masacres de Ituango c. Colombie.* (Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, 1 juin 2006).

C-278-07. (Cour Constitutionnelle Colombienne, 18 avril 2007).

C-330 de 2016. (Cour Constitutionnelle Colombienne, 23 juin 2016).

*Comunidad Moiwana c. Suriname.* (Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, 15 juin 2005).

T-025/04. (Cour Constitutionnelle Colombienne, 22 janvier 2004).

## **LEYES Y DECRETOS**

«Décret 2569 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones.» *Décret.* 12 décembre 2000.

«Loi 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.» *Loi.* 10 juin 2011.

«Loi 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación, y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.» *Loi.* 18 juillet 1997.

## **CONVENCIONES INTERNACIONALES**

«Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée.» *Plataforme d'information humanrights.ch.* 21 mai 2014. <http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-traites/disparitions/> (accès le septembre 16, 2016).

UNHCR. «Convention Relative au Statut des Réfugiés.» *Convention.* 1951.

«Convention de l'Union Africaine sur la Protection et l'Assistance aux personnes déplacées en Afrique.» Kampala, 2009.

## **TESIS**

DALTO, Marzia. «Le juge constitutionnel colombien vis-à-vis du déplacement forcé.» *thèse.* Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 10 juillet 2010.

## **PÁGINAS WEB**

DECAUX, Emmanuel. «Déclarations et Convention en droit international.» *Cahiers du Conseil constitutionnel* N°21. janvier 2007. <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil->



constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-21/declarations-et-conventions-en-droit-international.50561.html (accès le septembre 15, 2016).

DIOP, Mahktar. *Crise des réfugiés: Ce que l'Afrique peut nous apprendre*. 17 juin 2016. <http://www.jeuneafrique.com/334070/politique/crise-refugies-lafrique-apprendre/> (accès le aout 21, 2016).

ESSOUNGOU, André Michael. « Personnes déplacées : vers la fin du calvaire ». Avril 2010.

Disponible dans : <http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/april-2010/personnes-déplacées-vers-la-fin-du-calvaire>.

Consulté le 10 octobre 2016.

HENCKAERTS, Jean Marie, et Louise DOUSWALD-BECK. «ICRC.» 2009. <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf> (accès le juin 15, 2016).

SZUREK, Susan. «La responsabilité de protéger : Du principe à son application. Quelques remarques sur les enjeux de Law Making process en cours.» [http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/60-Article\\_Szurek.pdf](http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/60-Article_Szurek.pdf) (accès le septembre 12, 2016).

*Personnes déplacées internes*. <http://www.unhcr.org/fr/personnes-deplacees-internes.html> (accès le aout 10, 2016).

## DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Assemblée Générale des Nation Unies. *Résolution de l'AGNU sur le rapport de la troisième Commission*. 12 février 1999.

BEYANI, Chaloka. «Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de l'homme des personnes dans leur propre pays.» 2014.

Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide. *Responsabilité de protéger*. <http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml> (accès le septembre 12, 2016).

Comité Permanent Interorganisations. «Mise en oeuvre de l'action concertée face aux situations de déplacement interne.» *Directive pour les coordinateurs humanitaires et/ou résidents et les équipes des pays des Nations Unies*. septembre 2004.

Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies. «Personnes déplacées dans leur propre pays.» *Résolution de la Commission des Droits de l'Homme*. 19 avril 1996.

Commission des Droits de l'Homme. *Rapport sur la quarante-huitième session*. Conseil Économique et Social des Nations Unies, 1992.

DENG, Francis. «Note liminaire du Représentat du Secrétaire Général pour les personnes déplacées.» *Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays*. Nations Unies, 11 février 1998.

Groupe de Travail Sectoriel Global sur la Protection. «Manuel pour la protection des déplacés internes.» mars 2010.

Haut Commissaire de Nations Unies pour les réfugiés. *Aspects de Protection des activités du HCR en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du territoire*. 17 aout 1994.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. *HCR: En Bref*. <http://www.unhcr.org/fr/pages/4aae621ebf.html> (accès le avril 18, 2016).

IDCM. «Global Overview 2015.» *People internally displaced by conflict and violence*. mai 2015.

- IDMC, IRRI, NCR. «Le Pacte sur les Grands-Lacs et les droits des personnes déplacées.» *Guide pour la Société Civile*. septembre 2008.
- . «Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Notes explicatives.» Société américaine de Droit International, 2008.
- KALIN, Walter. «Report of the Secretary General on the Human Rights of Internally Displaced Persons: Framework on durable solutions for Internally displaced persons.» Secrétaire Général des Nations Unies pour les personnes déplacées à l'intérieur, 2009.
- OHCHR. *Manuel sur la restitution des logements et des biens des réfugiés et des personnes déplacées. Pour la mise en œuvre des Principes Pinheiro*. mars 2007.
- Organisation Internationale pour les Migrations. *L'OIM devient une organisation affiliée aux Nations Unies*. 26 juillet 2016. <https://www.iom.int/fr/news/loim-devient-une-organisation-affiliee-aux-nations-unies> (accès le août 5, 2016).
- «Principes Directeur relatifs aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.» 1998. <http://www.unhcr.org/fr/protection/idps/4b163f436/principes-directeurs-relatifs-deplacement-personnes-linterieur-propre-pays.html> (accès le juin 12, 2016).
- Sous-Commission des Droits de l'Homme. «Principes concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées.» Conseil Économique et Social des Nations Unies, 28 juin 2005.
- Sous-Commission des Droits de l'Homme. «Résolution 1998/26.» *Résolution*. 26 août 1998.
- Transitional Solutions Initiative. «Progress Update for Colombia.» *UNHCR*. <http://www.unhcr.org/protection/operations/55534200540/transitional-solutions-initiative-tsi-progress-update.html> (accès le août 23, 2016).
- UNDP, UNHCR, World Bank. «Transitional Solutions Initiative.» *Concept Note*. octobre 2010.
- UNHCR. *Le Sommet des Nations Unies pourrait "changer la donne" pour la protection des réfugiés et des migrants*. 6 septembre 2016. <http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/9/57d114ada/sommet-nations-unies-pourrait-nbspchanger-donne-protection-refugies-migrants.html> (accès le septembre 17, 2016).
- . «The Protection of Internally Displaced persons and the role of UNHCR.» 27 février 2007. <http://www.unhcr.org/protection/idps/50f951df9/protection-internally-displaced-persons-role-unhcr-excom-informal-consultative.html> (accès le août 10, 2016).
- Union Africaine. «Acte Constitutif de l'Union Africaine.» 11 juillet 2000.

## OTROS

- Gouvernement de la Colombie et FARC. «Accord pour la terminasion du conflit et la construction d'une paix étable et durable.» *Accord de Paix*. 24 août 2016.
- KALIN, Walter. «How Hard is soft law? The Guiding Principles on Internal Displacement and the need for a Normative Framework.» *Presentation at Roundtable meeting*. Ralph Bunche Institute for International Studies. CUNY graduate center., 19 décembre 2001.

